

20 December 2006

ENGLISH/SPANISH ONLY

UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION

COMMITTEE FOR THE REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION

Fifth session

Buenos Aires, 12–21 March 2007

**REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION AND OF
ITS INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS, PURSUANT TO ARTICLE 22,
PARAGRAPH 2 (a) AND (b), AND ARTICLE 26 OF THE CONVENTION,
AS WELL AS DECISION 1/COP.5, PARAGRAPH 10**

**REVIEW OF THE REPORTS ON IMPLEMENTATION OF AFFECTED COUNTRY
PARTIES OF REGIONS OTHER THAN AFRICA, INCLUDING ON THE
PARTICIPATORY PROCESS, AND ON EXPERIENCE GAINED
AND RESULTS ACHIEVED IN THE PREPARATION AND
IMPLEMENTATION OF ACTION PROGRAMMES**

**Compilation of summaries of reports submitted by affected
Latin American and Caribbean country Parties**

1. In accordance with decision 9/COP.7, the Committee for the Review of the Implementation of the Convention at its fifth session will review the reports on implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification by affected country Parties of regions other than Africa, including Latin America and the Caribbean. By its decision 11/COP.1, the Conference of the Parties requested the secretariat to compile summaries of such reports. Decision 11/COP.1 also defined the format and content of reports and, in particular, required summaries not to exceed six pages.

2. The present document contains 22 narrative summaries of reports as submitted by affected Latin American and Caribbean country Parties as at 17 November 2006, and document ICCD/CRIC(5)/MISC.2/Add.1 contains 15 tabular summaries; these are reproduced without formal editing. The secretariat has also made these reports available in their entirety on its website <www.unccd.int>.

ICCD/CRIC(5)/MISC.2

GE.06-65905

CONTENTS

	<u>Page</u>
Argentina.....	3
Bahamas	8
Chile.....	11
Colombia.....	14
Costa Rica	16
Cuba	20
Dominica.....	27
Dominican Republic	28
Ecuador	30
El Salvador.....	34
Grenada	36
Guatemala	37
Guyana	40
Haiti	42
Honduras	48
Mexico	50
Nicaragua	58
Panama.....	60
Paraguay.....	65
Saint Kitts and Nevis	66
Saint Vincent and the Grenadines	67
Suriname	69

ARGENTINA

La República Argentina, ubicada en el sector oriental del extremo sur del continente americano, posee una superficie total de 3.761.274 km², incluido el territorio antártico e Islas del Atlántico Sur, siendo el octavo país del mundo en superficie. Esa gran extensión determina una amplia variedad climática, desde los climas subtropicales al norte hasta los fríos en el extremo sur, con predominio de los templados en la mayor parte del país. El territorio nacional presenta 24 estados provinciales.

Las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, representan el 75% de la superficie total del país. De acuerdo a la clasificación agroecológica, a nivel nacional se pueden mencionar las siguientes regiones: Región de la Puna, Región del Chaco (árido, semiárido y subhúmedo), Región de los Valles Áridos, Región Centro Oeste y Región Patagónica, todas con importantes avances del proceso de desertificación.

El país ha suscrito en 1994 la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), la que fue ratificada en 1996, por el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la Ley 24.701. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), perteneciente al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, apoyada y asesorada por la Comisión Asesora Nacional (CAN) del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN) es la autoridad de aplicación, en materia ambiental, de la Ley 24.701 Por Resolución N° 250/04 de la (SAyDS) se reglamenta la ley 24.701 de ratificación a la (UNCCD), en forma consecuente y con fecha 6 de marzo de 2004, se promulga la Resolución 302/04 que establece la constitución de la CAN que tiene la función de llevar adelante la coordinación institucional de las políticas de Lucha contra la Desertificación, asesorando al Punto Focal para la implementación de la UNCCD en Argentina.

La CAN, al no tener presupuesto propio, se moviliza con fondos aportados por organismos nacionales y contribuciones de organismos internacionales, como la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), la cual ha firmado un Convenio conjuntamente con la SAyDS y el Instituto de Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Asimismo, las instituciones integrantes solventan sus gastos en la medida de sus posibilidades como parte del compromiso asumido. Desde su formación hasta el presente se han realizado 7 reuniones oficiales, surgiendo de ellas la convocatoria a presentación de proyectos vinculados a Ciencia y Tecnología para proyectos GEF de mediano tamaño a través del PNUD, entre otras la incorporación de un sitio piloto de evaluación de la desertificación en la Provincia de La Rioja. El Punto Focal (PF) y la CAN están trabajando en el diseño de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable, en cumplimiento del compromiso asumido para la puesta en práctica del Programa 21. En este marco se inserta el **Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN)**.

Si bien el proceso de elaboración del Programa finalizó en el año 1997, en la actualidad se continúa ejecutando, constituyéndose como el marco para las actividades nacionales, subregionales y regionales en la lucha contra la desertificación. Asimismo, desde el mes de diciembre de 1997 en que se realizó el primer Taller Nacional de Género y Desertificación se decidió que se incluya, en forma transversal, “La Perspectiva de Género” y que ésta atraviese todas las acciones contenidas dentro del PAN.

La República Argentina tiene la ventaja de poseer un potencial muy importante de Instituciones involucradas en la lucha contra la desertificación. El proceso participativo de Organismos

Nacionales, Provinciales, Municipales, Universidades, Institutos de Investigación y ONGs, ha facilitado la elaboración del PAN y ha continuado durante todo la ejecución del mismo. Debe destacarse la participación de los representantes del sector técnico científico, con el aporte de proyectos de investigación y extensión, como así también su participación en talleres y actividades científicas, tales como **Conocimiento y Tecnologías Tradicionales, Evaluación y Monitoreo de Indicadores de Desertificación, Sistema de Alerta Temprana en Sequía y Desarrollo Sustentable en Zonas Secas**, para dar cumplimiento al mandato del Comité de Ciencia y Tecnología (CST) de la UNCCD.

Argentina es uno de los países que más ha avanzado en indicadores en desertificación, lo que permitió su proyección internacional en la temática. El proyecto “Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas Áridas” (LADA) es un proyecto mundial orientado a evaluar el alcance de la degradación de las tierras secas del planeta y las razones de este fenómeno. Los objetivos principales son: desarrollar e implementar estrategias, herramientas y métodos de evaluación; para determinar y cuantificar la naturaleza, el grado, la severidad y los impactos de la degradación de la tierra; y construir capacidades de evaluación nacionales, regionales y globales; para el diseño y planeamiento de estrategias de intervención para mitigar la degradación de las tierras secas.

El proyecto LADA en Argentina, a cargo de la “Dirección de Conservación del Suelo y Lucha Contra la Desertificación (DCSyLD)”, ha formado la Comisión Asesora Técnica (CAT), cuya función es realizar la supervisión del proyecto. Durante el bienio (2003 – 2005) se ejecutaron proyectos piloto en tres países: **Argentina**, China y Senegal. Uno de ellos en áreas de mayor riesgo (hot spot) donde exista un alto grado de degradación, y el otro en un área donde el proceso de degradación ha sido revertido (bright spot). En este contexto, en octubre del 2003, se puso en marcha la ejecución de los sitios piloto, en la región de Puna, Valles Áridos, Centro Oeste, Chaco y Patagonia cada uno coordinado por una institución diferente (ONG, OG, Institutos de Investigación, Universidades).

Argentina ha propuesto una metodología para Evaluar la Degradación de Tierra en Zonas Áridas que ha sido validada a campo en los sitios mencionados. Se observa que ésta es lo suficientemente flexible para adaptarse a distintas situaciones, permitiendo la participación de actores locales, la interacción de equipos de trabajo, la conformación de un grupo de monitoreo y la definición de las escalas de estratificación y muestreo. Esto consolidó la formación del Grupo de Monitoreo y Evaluación el cual está diseñando un Sistema de Evaluación a nivel nacional.

De acuerdo a la decisión 5 de la IX Reunión Regional de los países de América Latina y el Caribe (ALC), y dada la experiencia en la temática de Puntos de Referencia e Indicadores de Desertificación (B & I), se realizó una propuesta al Secretariado de la Convención para coordinar una "Red de Programas Temáticos" (TPN), éste la aprueba y designa a la Argentina como país coordinador, con dos subcoordinaciones regionales. Esta red servirá para fortalecer y facilitar su aplicación a través de los PAN, PAS, PAR teniendo el PF la Coordinación Ejecutiva del Programa, en tanto que la contraparte académica está compuesta por un grupo de Universidades e Institutos de Investigación.

En el marco del Convenio entre la SAyDS, el INTA y GTZ se desarrolló el Programa de Apoyo al PAN (APAN), lo que permitió la realización de numerosas actividades de las cuales participaron miembros de la sociedad civil, de instituciones científicas, organismos nacionales y provinciales. Dentro de este Convenio se viene ejecutando el proyecto “Desarrollo Sustentable

de la Zonas Áridas y Semiáridas en Argentina” cuyo objetivo final es coordinar acciones entre los organismos gubernamentales, RIOD, ONGs, organizaciones de base y población en general para la prevención y control de la desertificación. Este proyecto beneficia a 12 Provincias que suman una superficie del 62% del país con una población del 29% del total. Las acciones se coordinan en un comité compuesto por un representante del PF UNCCD, otro del INTA, y el último de GTZ.

De modo complementario, en el marco del Convenio, se continúa con el apoyo a la CAN que, desde el año 2004, viene brindando ayuda técnica y financiera a las reuniones. Además, se logran excelentes documentos para las relaciones públicas obteniendo productos como:

- 1) Metodología de Sistema de Soporte de Decisión, (SSD).
- 2) CD de la metodología y los resultados del Monitoreo de Impacto Participativo (MIP).
- 3) Metodología para el Monitoreo y la Evaluación del PAN.
- 4) Documento de Fondos Rotativos (FFRR) Lecciones aprendidas y buenas prácticas.
- 5) Publicación de 5 tomos de “Alternativas”, Experiencias de Pequeños Proyectos en Zonas Áridas.
- 6) Afiches educativos sobre la desertificación.
- 7) Impresión del Atlas Argentino 50.000 ejemplares.
- 8) 500 juegos de mapas extractados de este Atlas, a mayor escala, para donarlos a las escuelas.
- 9) Mapas de Suelos de la República Argentina (INTA-GTZ), folletos explicativos del PAN.
- 10) Almanagues de estos últimos años con fotos acordes a la temática.
- 11) Además, colaboró en la búsqueda de ayuda de financiamiento, dándole apoyo al proyecto GEF Patagonia y elaboración de un CD de Entidades financieras.
- 12) Se confeccionó el libro “Fondos Rotatorios - Algunas Experiencias en la República Argentina”. Asimismo, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social que brindó la asistencia técnica a un Taller se elaboró un documento sobre experiencias y lecciones aprendidas en zonas áridas en el marco del PAN basándose en el análisis económico del uso y manejo de recursos y ambiente de las tierras secas, siendo una herramienta básica para el diseño e implementación de políticas de inversión públicas y privadas.

A fin de combatir la desertificación en la Patagonia, en el marco de la Convención de la UNCCD, el PAN y complementando el Programa para el Desarrollo de la Ganadería Ovina Sustentable (Ley Ovina), el Gobierno de la Argentina ha formulado y presentado al FMAM-GEF, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Organismo de Ejecución del Proyecto) y con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (Agencia de Implementación) el Proyecto denominado “Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos para el Control de la Desertificación en la Patagonia”. La asistencia del FMAM-GEF complementará las acciones de base y asegurará que se incluyan dentro de un marco regional fortalecido para el manejo sustentable de las tierras (MST), con el objetivo de rehabilitar los ecosistemas hasta lograr restaurar su plena integridad, estabilidad y funciones. Se considerará la inclusión de los principios del Manejo Sustentable en la planificación del uso de las tierras a nivel regional y en los procesos de toma de decisiones. También se incorporarán aquellas acciones dirigidas a una amplia sensibilización y consenso.

La UNCCD contempla, expresamente, que los países se consulten y cooperen para elaborar Programas de Acción Subregionales y Regionales con el fin de armonizar y complementar los programas nacionales, e incrementar su eficacia. En este marco se inserta el **Programa de Acción Subregional de Desarrollo Sostenible para el Gran Chaco Americano (PAS)** entre las **Repúblicas de Argentina, Bolivia y Paraguay**. Este programa ha realizado importantes avances, no sólo a nivel subregional, sino también en el país logrando un importante fortalecimiento institucional.

Desde el año 2003 hasta la fecha se han presentado y realizado una serie de proyectos dentro del Marco del Programa de Acción Subregional (PAS) de Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano. El proyecto **“Gestión Integrada y Desarrollo Sostenible para Reducir la Degradación Social, Económica y Ambiental en el Gran Chaco Americano”**. (Chaco OEA), éste fue presentado por la República del Paraguay ante la Agencia Interamericana de Cooperación para el Desarrollo (AICD) de la OEA siendo su objetivo general: “Revertir los procesos de deterioro que afectan a la región y mejorar las condiciones de vida de la población, a través de un modelo participativo de gestión integrada de los ecosistemas”. Presupuesto asignado aproximadamente, U\$S 90.000 por año, durante tres años para los tres países.

Así también se elaboró el documento de proyecto “Manejo Sostenible de Tierras en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano” (GEF Chaco) durante el cual se realizó la selección del Coordinador General del Proyecto y de los Asistentes Técnicos de los tres países. Además, continúan desarrollándose las acciones tendientes a concretar el **PAS para la Región de la Puna Americana, que involucra a las Repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina**. Actualmente esta iniciativa sometida a la OP-15 ha entrado en la etapa del pipeline y ha sido aprobado el proyecto PDF-B por el Fondo del Medio Ambiente Mundial por un monto total de U\$S 600.000.

En cuanto a Educación y Capacitación, y continuando con las actividades de la Estrategia de Educación Ambiental, se ha trabajado mediante la sensibilización y capacitación en el ámbito escolar. Se participó en charlas educativas dirigidas, principalmente, a alumnos del nivel primario explicándoles, mediante ejemplos sencillos y concretos, las causas y consecuencias de la problemática de la desertificación y sus posibles soluciones. Se dictaron cursos de capacitación para docentes rurales que, viviendo en tierras desertificadas, desconocían el proceso.

Como apoyo a la sensibilización y concientización pública, se editaron 50.000 ejemplares del Atlas Argentino, los cuales contienen 37 mapas de diferentes temáticas ambientales del país. Asimismo, se seleccionaron 12 de ellos y fueron llevados a láminas (60.000 unidades). Se desarrolló un póster con dibujos basado en los distintos factores, causas y consecuencias de este proceso, permitiendo al nivel escolar tener una visión más clara de la lucha contra la desertificación (2000 unidades). Este póster viene acompañado de una guía para su mejor comprensión (2000 ejemplares). Además, se escribieron diferentes artículos relacionados con desertificación que fueron incluidos en la Revista Ambiente de Chicos. (10.000 ejemplares). Por otro lado, se elaboraron tres publicaciones en forma de tríptico (1000 unidades cada una) con información relacionada a la desertificación y sus impactos en distintos puntos del país.

También se editaron 3 publicaciones Alternativas (5000 ejemplares cada una) conteniendo distintos Programas y Proyectos que se han ejecutados en el Marco del Programa de Acción

Nacional, estos ejemplares fueron digitalizados facilitando la búsqueda de la información (2000 unidades).

Las actividades de la cooperación internacional en la Argentina, en relación con los temas prioritarios de la UNCCD y el CST a la lucha contra la desertificación, han sido significativas y disparadoras de estrategias nacionales y provinciales. Especialmente en "Indicadores y Puntos de Referencia" se recibió apoyo financiero, durante los últimos años, que alcanzó en el Proyecto LADA primera fase U\$S 50.000 (2004 - 2005), con aportes financieros del MM, el GEF, el PNUD y el Proyecto BID de, aproximadamente, U\$S 60.000 durante los años 2004 y 2005.

La cooperación del gobierno de Alemania, a través de GTZ, ha sido permanente y una de las más desarrolladas desde antes de la UNCCD. Durante este proceso de cooperación internacional se ha logrado un eficiente mecanismo de coordinación interinstitucional mediante el Convenio arriba mencionado con el objeto de ejecutar el APAN. Durante los años 2003, 2004 y 2005 la GTZ a aportado, aproximadamente, U\$S 1.300.000. Mediante este Convenio se logró que el organismo responsable de la Política Ambiental (SAyDS); uno de cooperación (GTZ) y otro de desarrollo tecnológico (INTA), planifiquen diseñen y desarrollen en conjunto proyectos y actividades en la lucha contra la desertificación.

En consonancia con lo establecido por la Convención, el PF del PAN en Argentina ha concretado un presupuesto propio y lleva como título "Lucha Contra la Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía", por un monto global de \$ 3.5000.000. Por otro lado, la movilización de recursos nacionales y externos ha continuado descentralizada en función de las características federales de la Nación y de la importante cantidad de instituciones involucradas en la temática.

Argentina ha tenido una participación activa en la UNCCD desde su inicio, demostrando continuidad durante todo el proceso y cumpliendo con sus principios y mandatos. Esto le permitió proyectarse a nivel nacional e internacional con acciones y conceptos innovadores, movilizando y optimizando capacidades y recursos nacionales, provinciales, públicos y privados para llevar adelante estas acciones. En el diagnóstico participativo, efectuado en el marco de elaboración de este informe, se identificaron las debilidades y fortalezas que, desde el estado de situación actual, permiten identificar las acciones efectuadas y por efectuarse para seguir profundizando este proceso, a saber:

- Se concretó la CAN, es decir el Comité Ejecutivo Provisorio del PAN se institucionalizó en la Comisión Asesora al PAN.
- Se reglamentó la Ley 24.701 fortaleciendo el marco normativo y se están acompañando los procesos que deriven en el armado de los Programas de Acciones Provinciales (PAP).
- Se garantiza la continuidad del proceso en la estrategia de la lucha contra la desertificación, dado que el PF y la CAN cortan transversalmente todos los ejes identificados.
- Se optimizó la articulación institucional a nivel nacional, provincial y local insertando el concepto de estrategia del PAN en los programas de desarrollo social y mejoras de las condiciones de vida de la población.
- Se organizó una red activa de las capacidades existentes en el país de OG's y ONG's, a través del "Comité Federal del Medio Ambiente" (COFEMA) y de la RIOD, estableciendo un proceso continuo de comunicación, permitiendo relacionar a todos los actores, garantizando la continuidad y el acceso a la información.

- Se estableció un sistema nacional de seguimiento de la desertificación, con énfasis en Indicadores de Desertificación, orientado a la toma de decisiones.
- Se está trabajando en la posibilidad de ampliar el proceso participativo en aquellos ámbitos no incorporados vinculados a la temática.
- Se trata de incrementar los proyectos que contemplen acciones directas de apoyo al desarrollo de la población local. En este sentido resulta necesario trabajar en la selección de indicadores de impacto y seguimiento de la aplicación de la Convención y del PAN.
- Se deberán profundizar los Programas de Acción Subregional e Internacional en marcha, como estrategia de fortalecimiento interno, y concretar las propuestas en proceso de gestión.

Como lo expresa el presente Informe la República Argentina ha efectuado inversiones en recursos humanos, institucionales y financieros para la lucha contra la desertificación. La capacidad estructural, institucional y humana, tanto a nivel gubernamental como no gubernamental, orientó sus esfuerzos para resolver las múltiples causas y consecuencias de esta problemática. Se prevé así, un incremento escalonado de las inversiones en la lucha contra la desertificación lo que reforzará la aplicación de las propuestas y programas diseñados en el marco del PAN que deberá ser acompañado y potenciado con el apoyo externo.

BAHAMAS

This First National Report provides an overview of the existing geophysical, biophysical and socio-economic conditions of the Bahamas. It also identifies various legislation, policies, institutional measures and participatory processes that exist or were undertaken, and highlights the various national projects undertaken and planned that address the land degradation issues facing the country. Annex 1 summarizes key facts that relate to the implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in the Bahamas, as outlined in the Help Guide (UNCCD General Document ICCD/CRIC(5)/INF.3). Annex 2 contains the country profile.

ES-1 Environmental and Socio-economic Conditions

The Bahamas is an archipelago of some 700 low-lying islands and cays, with a total land area of approximately 15 000 km² (5 792 mi²). It is known for its subtropical climate, warm waters, fairly high mean temperatures and moderate rainfall. There are no rivers; however, several islands have tidal creeks and blue holes. Lakes are generally small in size, and none are freshwater lakes.

Freshwater in the Bahamas is considered scarce, totaling 66 m³/capita/year (2,331 ft³/capita/year) in the year 2002, based on annual internal renewable resources. The only natural source of freshwater is groundwater, which originates from rainfall. The amount of rainfall is a major variable affecting the quantity of freshwater available on each island. The only major inhabited island that is currently unable to supply enough freshwater to meet demand is New Providence. The shortfall is currently met by barging freshwater from Andros Island and producing potable water by reverse osmosis.

Other natural resources of the Bahamas include the coastal and marine environments, which are both vast and vulnerable. Bahamian waters span some 259,000 km² (100,000 mi²) of ocean, and are the habitat for a diverse range of marine flora and fauna.

The Bahamas is not well endowed with mineral resources. There are no appreciable amounts of metallic ores or fossil fuels; however, salt and aragonite have been exploited on a large scale. Bahamian soils are poor in nutrients and require heavy fertilization. Shallow topsoil conditions limit the application of mechanized agriculture.

Agriculture is a small contributor to the economy; together with fisheries and manufacturing, these sectors account for less than 10% of the gross domestic product (GDP). Tourism is the main economic sector in the Bahamas, accounting for approximately 60% of the GDP. The second major sector is banking and finance, which accounts for approximately 15% of the GDP. With tourism and banking and finance accounting for three quarters of the GDP, it is clear that the economy is disproportionately service-based and that the country is vulnerable, not only environmentally, but also economically.

The geographical makeup and location of the Bahamas islands make them vulnerable to seasonal storms and hurricanes. Extensive damage to the landscape, particularly shoreline erosion in addition to flooding, salt intrusion and structural damage, is not uncommon and frequently result in environmental, economic and property losses.

Free education is available in government primary and high schools throughout the Bahamas. Prior to Independence (10 July 1973), persons left home and sought postsecondary education abroad. After Independence, the development of higher education was rapid, and today there are several local institutions and programmes available that offer degree-level instruction.

The participation of Bahamians, particularly women, in higher education is increasing both at home and abroad.

ES-2 Relevance of the UNCCD to the Bahamas

The very limited land resources are under pressure from the demands of economic development. Tourism and housing development have significantly increased the demand for land and land clearing operations. These pressures have led to compromises that increase the vulnerability of the land to degradation caused by both storm surges and improper excavation and mining. Other pressures on the land include inappropriate farming practices.

The UNCCD is the only convention that directly focuses on the sustainability of land resources. The Bahamas recognizes the importance of sustainable land management to national development, and signed on to the UNCCD in hopes of participating in information-sharing, technology access and exchange and capacity-building that will facilitate sustainable, national development in the Bahamas.

ES-3 Sustainable Development Framework

There is no single legislation that deals with land management in the Bahamas. This responsibility is divided among various government agencies through several pieces of legislation; however, none of the legislation directly outlines or encourages sustainable land

management. Furthermore, monitoring and enforcement remain challenges for the Bahamas because of the many agencies involved and the archipelagic nature of the country.

There are numerous national institutional measures that address land degradation. Inter-agency and multi-party committees and workgroups have been established to formulate recommendations and strategies for addressing various issues, such as land information management, coastal zone protection, wetland protection, biodiversity loss and climate change.

These committees and groups have implemented several initiatives and activities, with financial and technical support from various external funding agencies. Currently efforts are under way to establish an integrated coastal zone management programme and a major project to modernize land use and information management — the Land Use Policy and Administration Project — has begun with technical and financial assistance provided by the Inter-American Development Bank.

There exist policy frameworks that address land management. One policy initiative is the environmental impact assessment (EIA) process, which applies to large-scale development projects, the major pressure on land resources. The EIA process was adopted by the Government in order to instill sustainable development practices in the planning stage of development project proposals.

The other major initiative is the National Development Strategy (NDS). The NDS aims to address the major land administrative and management challenges facing the country (land tenure security, land administration and management) through the successful implementation of three project components: Land Administration Modernization, Land Information Management and National Land Issues and Policy Guidelines.

ES-4 Measures Taken to Implement the UNCCD

The BEST Commission convened a two-day national awareness seminar (NAS) on land degradation in The Bahamas 23–24 November 2004, with financial support from the UNCCD secretariat. This was the first participatory process organized in the Bahamas that was specifically designed to focus on land degradation. Stakeholders that participated in this seminar include representatives of local government, government agencies, non-government organizations and the private sector.

During the seminar, the stakeholders identified major causes of land degradation in the Bahamas: improper land development and agricultural practices, natural disasters, invasive species, poverty (squatting) and lack of education. It was also revealed that there were links between land degradation and biodiversity loss and the effects of climate change. The stakeholders also made recommendations on the priorities of the national action programme (NAP), namely the identification and classification of land, development of land-use plans and preparation of educational tools.

The outcomes from the NAS formed the foundation for elaboration of the NAP, which was officially adopted in April 2006. The NAP is designed to address the identified national priorities, in conjunction with the National Development Strategy, using a three-tiered approach (planning, development and implementation, evaluation). It will seek to formulate

and implement land management procedures and sustainable development programmes through the creation of a national coordinating committee, the development of science-based assessments of land conditions, the evaluation of existing policies, programmes and legislation and the periodic monitoring and evaluation of land conditions.

ES-5 Next Steps and Challenges

With both the national action programme (NAP) and the National Development Strategy sharing the common goal of sustainable growth and development through responsible use of land, coastal, marine and freshwater resources, the next steps for the Bahamas include the implementation of both in a harmonious manner.

Currently there are several projects and programmes completed, pending or under way of diverse duration and time lines, which were or are led by different agencies and organizations. A national coordinating committee, that may serve as the umbrella under which these projects and programmes can be united, should be established as soon as practicable. This will be challenging due to the decentralized approach to land management currently utilized in the Bahamas and the limited capacity within existing institutions.

Another challenge is securing monetary funds for implementing the NAP. The financial mechanism utilized should facilitate the implementation of projects and programmes within the Family Islands. To date, no national project or programme has been successfully implemented without external financial and technical support.

CHILE

Chile aplica un modelo exitoso de lucha contra la desertificación y sequía basado en la gestión de los Servicios del Estado, especialmente aquellos organismos que administran instrumentos de fomentos que contribuyen a la lucha contra la desertificación y la sequía, así como la gestión de la Sociedad Civil y la gestión de la Cooperación Internacional.

A partir del año 2002, Chile inicia una segunda etapa de su PANCCD-Chile. Se impulsa así un Proyecto-País para focalizar la gestión e incrementar el impacto de las acciones de lucha contra la desertificación y la sequía. Se plantea perfeccionar el modelo de gestión mediante la articulación y perfeccionamiento de los instrumentos de política pública del gobierno de Chile para la lucha contra la desertificación y sequía. Así, a partir del año 2002 la gestión del PANCCD-Chile se focaliza en 8 biomas o hotspot de desertificación: Norte Chico, Puna, Secano, Precordillera, Araucanía, Patagonia, Territorios Insulares Oceánicos (Isla de Pascua, Archipiélago Juan Fernández,...) y Desierto de Atacama.

Asimismo, se definen como líneas estratégicas de acción a la Articulación Institucional, la Participación, los Instrumentos de Fomento, la Innovación y Demostración y los Sistemas de Apoyo. El perfeccionamiento del modelo de Chile para la lucha contra la desertificación y la sequía en el período 2002-2005 se ha centrado también en la incorporación de nuevos actores de la sociedad civil y de la cooperación internacional.

La participación de la sociedad civil en la implementación del PANCCD-CHILE ha sido creciente, ampliándose la base de participación en el Comité Consultivo Nacional a las

agrupaciones de gobiernos locales y comunidades de base, los parlamentarios y la empresa privada con gestión en responsabilidad social y ambiental corporativa. En el período, destaca el rol de la Universidades y la red de ONG's adscritas a la Convención UNCCD (RIOD) desarrollando modelos para la gestión comunitaria de lucha contra la desertificación y sequía, así como el desarrollo de sistemas de indicadores y puntos de referencia de desertificación, con apoyo de la cooperación internacional.

En particular, el PANCCD-Chile ha creado una potente base de gestión comunitaria incorporando agrupaciones de gobiernos locales en la gestión de lucha contra la desertificación, destacando "Aymaras sin Fronteras" en el hotspot de la Puna Americana. Las empresas con responsabilidad social y ambiental corporativa (RSE), han iniciado un proceso de colaboración substantiva al desarrollo local, especialmente en el bioma de la Puna Americana. Los parlamentarios del área de medioambiente constituyen un pilar fundamental de la nueva fase del PANCCD-Chile y están integrados a la Red Parlamentaria de la Convención UNCCD.

En el contexto de la región americana, Chile presenta una de las mayores cifras en inversión pública para la implementación de su Programa de Acción Nacional (PANCCD-Chile), con un inversión total de US\$ 521,3 millones en el período 2002-2005 y una inversión promedio anual de US\$ 96,1 millones en instrumentos de apoyo a las comunidades afectadas. Esta inversión pública ha significado un incremento del 40% con respecto al promedio de inversión en el período 2000-2001.

Con respecto a la superficie intervenida mediante los instrumentos de política pública en esta materia, se alcanzó un total de 1,92 millones de hectáreas para el período 2002-2005, con un promedio anual de 480.543 hectáreas. Esto significa un incremento del 26% en la superficie intervenida en promedio anualmente con respecto al promedio del período anterior 2000-2001. En este mismo contexto, el número total de usuarios de los programas de gobierno que contribuyen a la lucha contra la desertificación y la sequía alcanzó a 298.930 usuarios, que corresponden al 23% de la población afectada por desertificación y sequía en el país. El promedio anual de atención a usuarios alcanzó a 74.733 usuarios, lo que representa un incremento de 12,4% de incremento en comparación al promedio de usuarios atendidos en el período anterior 2000-2001. Por otra parte, la gestión de la Sociedad Civil comprende un conjunto muy sustantivo de acciones de lucha contra la desertificación y la sequía mediante gestión comunitaria, especialmente con enfoque de género. La evaluación cuantitativa de la gestión de la sociedad Civil a través de indicadores de resultado corresponde a uno de los desafíos a abordar en el futuro inmediato.

Con respecto a la contribución de la Cooperación Internacional a la implementación del PANCCD-Chile, esta ha sido muy significativa en el período 2002-2005. A este efecto, Chile ha logrado el apoyo del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) para implementar su Proyecto-País con un aporte estimado en la fase de implementación de US\$ 8 millones, el cual permitiría fortalecer la articulación institucional propuesta en el proyecto-país de lucha contra la desertificación acordado por el Comité Consultivo Nacional en Septiembre 2002.

El rol de Chile en el Programa de Acción Subregional para el Desarrollo Sustentable la Puna Americana (PASPUNA) ha contribuido a consolidar la gestión de la Convención UNCCD en la Puna Americana, generando un importante portafolio de proyectos, así como un Acuerdo Marco de Cooperación Trans-altiplánico y la Agenda Fase III que incluye la implementación de proyecto full-size con financiamiento del GEF. De esta manera, la Cooperación Internacional ha

contribuido a la labor del Punto Focal UNCCD de Chile y las organizaciones nacionales del Comité Consultivo Nacional del PANCCD-Chile en la implementación del PANCCD-Chile, apoyando un portafolio de a lo menos US\$ 20 millones en el período 2002-2005. Se incluyen en este portafolio, el apoyo al cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile en el marco de la Convención UNCCD como por ejemplo, el PASPUNA y el PAR-ALC.

Entre los principales proyectos apoyados por la Cooperación Internacional destacan los siguientes:

- Proyecto GEF-Chile OP15. Comité Consultivo Nacional PANCCD-Chile.
- Proyecto GEF-PASPUNA OP15. Secretaría Pro-Tempore PASPUNA.
- Proyecto Millennium Ecosystem Assessment Salar de Atacama.
- Proyecto Río Hurtado: Agenda Civil contra la Desertificación y para la superación de la pobreza Comisión Europea-ONG El Canelo de Nos.
- Proyecto Acciones de lucha contra la Desertificación en una perspectiva de Género en Áreas del Secano de la IV y la VI Región. FIDA-CODEFF.
- Proyecto Gestión de Recursos Hídricos mediante la Aplicación de sistemas Agroforestales en América Latina. Comisión Europea-Secretaría Pro-Tempore PASPUNA.
- Programa Iniciativa Global de sobre Pastoralismo. PNUD-Secretaría Pro-Tempore PASPUNA.

De la misma forma, la participación de Chile en la implementación del Programa de Acción Regional de la Convención UNCCD para América Latina y el Caribe, se focaliza en la difusión de los sistemas de indicadores de desertificación desarrollados por Chile (MONITOR, REDATAM, SNMUT), así como en el desarrollo de proyectos regionales en los temas de agua y agroforestería.

La posición de liderazgo que ha alcanzado Chile por el grado de implementación de su programa de acción nacional (PANCCD-Chile), y el rol cumplido a nivel del programa de acción subregional para la puna Americana (PASPUNA) y del programa de acción regional de la convención (PAR-ALC) han permitido incrementar la visibilidad de la región de América Latina y el Caribe en la perspectiva de la cooperación internacional.

Finalmente, en el período 2002-2005, Chile ha jugado un rol sustantivo en el procesos de la Convención UNCCD. En este ámbito, Chile forma parte del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IIWG) que elabora la Estrategia a Largo Plazo de la Convención UNCCD.

En resumen, Chile:

- juega un rol protagónico en el marco de la Convención UNCCD y está llamado a cumplir un rol destacado en la definición de la Estrategia a Largo Plazo de la Convención UNCCD.
- contribuye de manera importante a la implementación de la Convención UNCCD a nivel de la región de América Latina y el Caribe.
- ha cumplido un rol fundamental en la implementación de la Convención UNCCD a nivel de la sub-región de la Puna Americana.
- ha logrado avances concretos en su Programa de Acción Nacional para el período 2002-2005, especialmente en términos de inversión pública, superficie intervenida y número de usuarios atendidos, lo cual podría contribuir significativamente a mejores niveles de paz social en Chile.

COLOMBIA

La república de Colombia tiene una extensión continental de 1'141.782 Km², situada en su totalidad dentro de la zona de confluencia intertropical del mundo (ZCIT), sujeta a los flujos de los vientos alisios del NE y del SE, y una población aproximada de 44.575.750 habitantes¹, de los cuales cerca del 70% se encuentra concentrada en la región Andina (montañas y sabanas).

En Colombia debido a las condiciones topográficas (cadenas montañosas y valles alternos), la forma como se han dado los procesos de ocupación del territorio y la cultura de producción y consumo inherentes al modelo de desarrollo imperante, los procesos de degradación de suelos continúan incrementándose. Factores como erosión, compactación, salinización y contaminación dinamizan un proceso acelerado de desertificación².

El desarrollo de los procesos de apropiación del territorio colombiano ha conducido a una importante transformación de los ecosistemas originarios, a través de procesos de colonización y establecimiento de sistemas productivos en alta medida extractivos y deteriorantes de la cobertura vegetal. Han sido especialmente afectados los bosques húmedos tropicales, bosques secos, bosques andinos, páramos, sabanas del Caribe y Orinoquia y los ecosistemas de manglar³.

A pesar de los esfuerzos para la conservación de estos ecosistemas, persisten procesos de transformación, fragmentación y pérdida por actividades antrópicas, constituyéndose en una de las principales causas directas de pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y disminución de bienes y servicios ambientales, como la regulación hídrica, la protección de suelos y el suministro de agua para consumo humano y procesos productivos, entre otros, importantes para el desarrollo local de muchas comunidades.

Dado que la información relacionada con ecosistemas de zonas secas y degradación de tierras era dispersa y no atendía a los índices e indicadores propuestos por la UNCCD, el 19 de agosto de 2002 el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) firmó una Carta de Acuerdo con el Mecanismo Mundial de la UNCCD para poner a disposición de la Dirección de Ecosistemas del MAVDT una contribución financiera por valor de US\$ 20.000 dólares, con el fin de “obtener insumos (elementos de diagnóstico) para la elaboración de la versión preliminar del Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación en Colombia (PAN) fase I” y un taller de validación dirigido a las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), ONGs, comunidades de base e instituciones relacionadas con el tema.

Dicha donación sirvió para contratar al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para que realizara los estudios que identificaran y describieran los ecosistemas existentes en las zonas secas del país a escala 1:1'500.000, así como el diagnóstico del estado de la desertificación y degradación de tierras en las zonas secas de Colombia a escala 1:1'500.000.

De acuerdo con lo anterior se pudo determinar que las zonas secas ocupan 245.342 Km², es decir 21.5% de la extensión continental del país, encontrándose presente en una gran variedad de

¹ Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Abril de 2006

² Evaluación rápida de las capacidades nacionales para el manejo de la degradación de suelos en Colombia – PNUD, 2000

³ Ibid, PNUD 2000

ecosistemas que van desde los páramos en las partes más altas de las cordilleras hasta los ecosistemas de las tierras bajas.

En cuanto a la desertificación se estableció que 193.510 Km², 16.95 % del territorio nacional, se encuentra afectado por este fenómeno. 78.9% de las zonas secas del país presentan diferentes niveles de desertificación, derivados principalmente de la erosión y salinización. Con relación a la compactación se determinó que aproximadamente 74% del territorio nacional es susceptible a esta problemática, presentándose especialmente en los valles interandinos, el caribe y la orinoquia.

Alrededor del 80% de la Región Andina de Colombia está afectada por erosión. Uno de los mayores causantes de este fenómeno es el uso del suelo para actividades agropecuarias con tecnologías inadecuadas y eventualmente sin tener en cuenta su aptitud de uso.

Contando el país con estadísticas e indicadores sobre los ecosistemas de zonas secas y su afectación por procesos de desertificación, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial conjuntamente con las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), sociedad civil y otras entidades relacionadas con el tema, formularon el PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA (PAN), mediante el cual se espera que al 2020 Colombia haya avanzado en la implementación de estrategias, acciones y mecanismos para la prevención, corrección, restauración, recuperación y/o detención de los procesos de degradación de tierras, desertificación y mitigación de la sequía, especialmente en las zonas secas, de manera articulada con las instancias internacionales, nacionales, regionales y locales, teniendo en cuenta una visión ecosistémica que garantice la gestión integrada y sostenible de la tierra, el agua, los recursos vivos y ecosistemas, considerando los factores ecológicos, socioeconómicos y culturales del país.

El PAN fue adoptado por el Consejo Nacional Ambiental el 13 de diciembre de 2004, enviado oficialmente a la Secretaría de la UNCCD en marzo de 2005 y publicado en septiembre de 2005, comenzando su implementación en enero de 2006 mediante la ejecución de cuatro proyectos piloto en áreas prioritarias del territorio nacional. La implementación del PAN cuenta con recursos donados por el Gobierno de Holanda y con contrapartidas de las entidades de orden regional (Corporaciones Autónomas Regionales, departamentos, municipios y organizaciones de base).

Paralelamente al PAN, continúa la implementación de otras políticas ambientales que contribuyen en la prevención de la degradación de tierras y a la solución de esta problemática en diferentes ecosistemas del territorio nacional. La aplicación de estas políticas es necesaria para obtener condiciones de viabilidad de acciones que buscan detener, mitigar y/o revertir el grave problema de empobrecimiento del suelo y el consecuente deterioro del patrimonio ambiental de Colombia.

COSTA RICA

The objective of this Third National Report is to present how Costa Rica has advanced since the Second National Report presented in April 2002 in complying with the national commitments agreed on in the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).

Institutional and Legal Background

In compliance with the principles established in the UNCCD, Costa Rica has already taken steps in institutional terms as well as in its legal framework. In institutional terms, the Ministry of Planning (MIDEPLAN) is in charge of overseeing the creation of the National Environmental and Agricultural Plans. The Ministry of Agriculture (MAG) and the Ministry of Environment and Energy (MINAE) are the two State entities in charge of guaranteeing sustainable land management (SLM). The local municipal governments are required to develop Regulation Plans for the proper use of the land in their jurisdictions. Costa Rica has 25% of its territory under some type of environmental protection status, under the direction of the National System of Protected Areas (SINAC). Agricultural land in Costa Rica has been distributed by the Agrarian Development Institute (IDA) in order to promote a more equitable access to the means of production. Incentives for land restoration and conservation by means of reforestation are provided by the National Forestry Promotion Fund (FONAFIFO).

In order to oversee national compliance with the UNCCD, the National Advisory Commission on Degraded Lands (CADETI) was established in 1998. The legal framework in Costa Rica has also taken into account many of the same principles established in the UNCCD. The Organic Environmental Law (1995) establishes land planning and sustainable land management as the required frameworks for national use of natural resources. The Forestry Law (1996) created FONAFIFO and established the strategy of Payment for Environmental Services (PES) as the means of creating incentives for land restoration and conservation. Costa Rica ratified the UNCCD in 1997, and in 1988 CADETI was created by Executive Decree. In 1988 the Land Use, Management and Conservation Law defined the watershed as the management unit and created Watershed Committees to develop Watershed Plans that in conjunction form the National Land Management Plan.

Institutional and Legal Advances

Following the “Second National Report” in April 2002, the main advances in institutional and legal terms build upon the national achievements established so far.

Among the principal commitments required of signatory Countries of the UNCCD is the creation of a National Action Programme (NAP). In Costa Rica, the creation of the NAP was based on a number of initiatives promoted by CADETI including the evaluation of the national legal framework related to the issues of the UNCCD, the development of procedures to determine land use divergences, a methodology for selecting watersheds for a pilot project, an information system of degraded lands, and a proposal for the political-institutional framework of the NAP. The NAP for Costa Rica was concluded and ratified in May, 2004.

The objectives of the NAP include: 1) to carry out a national diagnostic on the state of land degradation and its effects on the human population; 2) to promote the implementation of the established legal framework in favor of SLM; 3) to facilitate a greater participation of civil society in SLM; 4) to promote SLM practices through appropriate technologies; 5) to promote a culture of monitoring and evaluation; and 6) to select a watershed for a pilot project.

The NAP brings together diverse strategic objectives that are also found in several national strategies and plans. The National Environmental Strategy (2005-2020) includes a chapter on SLM and explicitly proposes application of the NAP by CADETI. The Strategic Plan (2004-2010) of the Agricultural Technology Transference and Innovation Institute (INTA) is geared towards SLM. The National Development Plan (2002-2006) of MIDEPLAN includes a chapter on SLM. FONAFIFO has also incorporated into its PES strategies, incentives for agro-forestry systems.

An important achievement in institutional terms is the greater reach obtained by CADETI in its participating membership, with the incorporation post-2002 of the SINAC-MINAE Regional Office in Esparza, INTA, MAG Regional Office in Esparza, MAG Agricultural Service Agency in Orotina (ASA-MAG Orotina), MAG Agricultural Service Agency in San Mateo (ASA-MAG San Mateo), Agronomy Department of the University of Costa Rica (UCR), Biology Department of UCR, Geography Department of UCR, and the Costa Rican Association of Soil Sciences (ACCS). These entities complement the previous membership of CADETI that remain in the Commission, as well: MINAE, MAG, SINAC, the National Meteorological Institute (IMN), the Development Observatory (OdD) of the UCR, the Research Programme in Synecology and Restoration of Terrestrial Ecosystems (SIRECO) of the UCR, and Ambio Foundation.

CADETI has also coordinated initiatives with other institutions. With the Rural Development Programme of MAG, the Inter-American Institute for Agricultural Cooperation (IICA), and the Social Research Institute of the UCR, CADETI have coordinated an initiative for the creation of a Rural Development Observatory, and the establishment of a National Network for Rural Development. CADETI has also participated in the Project for the Analysis of National Capacities for the Implementation of Global Environmental Conventions, along with the Focal Points of the Convention on Biodiversity (CBD) and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), as well as representation by the United Nations Development Programme (UNDP) and the Global Environment Facility (GEF).

Participation and Implementation of the NAP

With the establishment of the NAP, the selection of a watershed for its implementation in a Pilot Project involved a process of evaluation that included the following criteria: climate, degree of land degradation, concentration of land degradation, soil fragility, regeneration capacity, social development index, accessibility, and the demonstrative capacity of the watershed. The result was the selection of the Jesús María river watershed (JMRW) as the site for the Pilot Project. The process of incorporating JMRW stakeholders into the Pilot Project has included a series of workshops for carrying out a participatory diagnosis of the watershed, the creation of local capacities, collaboration in the generation of local projects of SLM, and the establishment of a participatory process of monitoring and evaluation for replication purposes nationwide. The first phase of local workshops has so far included 3 of 15 workshops in the upper, middle, and lower parts of the watershed, and has collected the perspectives of over 100 local stakeholders, including, men, women, children, youth, and elders.

Mobilization and Coordination of National and International Resources

The primary mobilization of resources revolved around the creation of the NAP. This process involved a survey of over 100 national institutions regarding priorities for SLM. The creation of the NAP also involved a national diagnosis of biophysical and socioeconomic factors, as well as a national political-administrative analysis. With a series of validation workshops, the NAP was

concluded and ratified in May 2004. This was made possible with the financial assistance of the Global Mechanism and the UNCCD secretariat.

Following the publication of the NAP, CADETI concentrated efforts in carrying out the commitment established in the NAP of implementing a Pilot Project in a demonstrative watershed. The efforts to procure financial assistance from the GEF for the Pilot Project to Implement the NAP in a Watershed, was initiated by CADETI in 2003 through UNDP as the National Implementing Agency. Unfortunately, deficiencies in UNDP support to the Project caused delays well into 2005. Finally, with changes in UNDP personnel, the process gained expediency and the Concept Paper is currently under revision at UNDP-New York to procure GEF financing for the construction of a Full Size Project Proposal.

National resources have been mobilized following 2002 for the maintenance of CADETI operations. Human resources and logistical support has been granted by the UCR, MAG, MINAE, SINAC, INTA, the National Meteorological Institute (IMN), and the communities of the JMRW. In addition, there has been some minimal, but appreciated financial support for CADETI operations provided by MINAE, ASA MAG San Mateo, and ACCS.

Measures Adopted in the NAP Framework

The NAP takes into account five strategic areas: Research, Coordination, Participation, Implementation, and Validation. In the area of Research, the INTA has produced a Project Proposal for investigating the State of the Land at a scale of 1:25.000. The IMN has carried out a National Risk Assessment. The Programme for Rural Development of the MAG is involved in establishing a Rural Development Observatory. The Odd-UCR has established the initial taxonomy for an information System on Degraded Lands. Other research initiatives that correspond to NAP principles include those of the Social Research Institute of the UCR, the National University (UNA), the State Distance University (UNED), the Technological Institute of Costa Rica (ITCR), EARTH University, the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (CATIE), Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), and others.

In the area of Coordination, the constant work carried out by CADETI is fundamental for promoting the measures adopted in the NAP framework. The Pilot Project has gathered widespread support by the members of CADETI, as well as other institutions such as the Costa Rican Electricity Institute (ICE), the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), IDA, the Ministry of Education (MEP), FONAFIFO, and the Municipal governments of Orotina, San Mateo, Esparza, and San Ramón, all of which form part of the JMRW. In the area of coordination, CADETI has also managed to clarify the legal, political, administrative and instrumental measures applicable to SLM. These include establishing SLM under the national Land Use Planning framework provided by the Organic Environmental Law, identifying the Regional Environmental Councils and the Watershed Committees as the entities provided for by law for participatory SLM planning, and promoting PES as a fundamental instrument for promoting SLM practices.

In the area of Participation, this component has been incorporated into national environmental legislation, into the NAP and into the Plot Project in the JMRW. CADETI has promoted local participation by means of a series of workshops in the watershed for participatory diagnostics, local capacity creation, accompanying of local project proposals, and the establishment of a local practice of monitoring, evaluation and adaptation of the Pilot Project.

In the area of Implementation of best practices for SLM, the State promotes the practice of Conservationist Agriculture through the Department of Conservationist Agriculture of the MAG. The country has also advanced in adopting certification practices, such as the International Standards Organization (ISO) certifications around social and environmental excellence, the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) Organic Certifications for organic production, and the Forest Stewardship Council (FSC) certifications around sustainable forestry practices. Among the most important mechanisms for promoting best practices of SLM, are the PES strategies provided for by FONAFIFO nationwide. Costa Rica has also greatly expanded nonextractive land use practices, such as rural Eco-Tourism among small and medium sized landowners.

The strategies of the NAP and their implementation in a pilot watershed need to be validated by means of a process of monitoring and evaluation through selected indicators. CADETI has recognized the need for creating a national culture of monitoring and evaluation. The OdD has already established a taxonomy of indicators for monitoring and evaluating land degradation through its Information System on Land Degradation (SIDEI), and the Pilot Project aims to establish a local SIDETI in the JMRW. Validation of the NAP strategies in the Pilot Project is also based on the participatory assessments carried out in the watershed, and the programme planned for creating a local culture of monitoring and evaluation. Validation of the NAP strategies in the Pilot Project is a necessary step in mainstreaming the NAP strategies throughout the other watersheds nationwide.

National Initiatives Supporting UNCCD Principles

Nationally, the most important initiative, with concrete measures being implemented in concordance with UNCCD principles, is the PES system to promote the expansion of forest cover in the country. The Forestry Law establishes a fuel tax specifically for financing the PES system. In 2006 US\$15 million were collected by this means. In addition, the State has obtained financial support for its PES system from the World Bank for US\$32.5 million as a loan, US\$8 million from the GEF in donation, US\$10 million from the KFW German Bank, and US\$2 million from the Norwegian Government.

Numerous other initiatives, both from the State and from private enterprise, contribute to implementing PES strategies for promoting SLM, of which some of the most important are: the EcoMarket Project for over US\$ 40 million to finance increases in forest cover; the National Capacities Analysis Project for Implementing Global Environmental Conventions for US\$ 200,000; the Regional Project for Integrated Silvi-pastoral Strategies for Ecosystem Management financed by the World Bank, the GEF and others for US\$ 363,000; PES strategies for the watersheds of San Fernando and Volcán of Sarapiquí financed by FONAFIFO for US\$ 120,000; PES for the watershed of the Platanar river watershed financed by FONAFIFO for US\$ 162,000; PES Markets financed by FONAFIFO and the National Electricity Company (CNFL) for over US\$ 5 million; the Programme for Sustainable Agricultural Production financed by the Inter-American Development Bank for over US\$ 17 million. These projects constitute an important counterpart to the Pilot Project for Implementing the NAP promoted by CADETI in the process of requesting a Full Size project from the GEF for US\$3 million.

Parameters for Measuring Progress

There are currently no nationally established generalized parameters for measuring progress in SLM. However, CADETI has proposed indicators in the SIDETI, which include economic,

social, environmental and institutional criteria. The NAP and the Pilot Project also respond to the United Nations Development Allocation Fund (UNDAF) parameters for measuring progress, which include greater participation, greater opportunities for debate, access to information, investment in human capital, and decentralization of decision-making processes. The NAP and Pilot Project may also be evaluated according to some of the Millennium Development Goals, which include poverty reduction, greater equity, and environmental sustainability. Finally, the Pilot Project and the NAP will be subject to parameters for measuring progress established locally in a participatory process, to include aspects of environmental sustainability, greater equity in access to the benefits of improved SLM, greater autonomy in decision-making, and greater security in the face of socioeconomic and environmental threats.

Current Barriers to Advancing SLM

Despite the progress achieved in complying with the principles of the UNCCD, some important barriers to advancing SLM still persist in Costa Rica. Namely, there continues to be a prevalence of lack of political-administrative coordination. At the local level, there is a marked deficiency in human capital. At the national level, CADETI still has not been accorded national financing to carry out its functions established by law. Finally, the slow and convoluted procedures required by the international cooperation agencies contribute to the disenchantment of stakeholders in efforts to advance SLM. These barriers are challenges that CADETI considers require serious attention.

CUBA

En el año 2002, la República de Cuba presentó el II Informe Nacional sobre la Aplicación de la Convención de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía, el cual se ha considerado como referencia respecto a las acciones realizadas en el período 2003-2005, reflejadas en el presente III Informe Nacional. Este se ha elaborado a partir de la Guía establecida por la UNCCD (ICCD/CRIC (3).INF.3), con una amplia participación de todos los actores locales y nacionales directamente vinculados con las acciones de lucha contra la desertificación y la sequía. Constituye un documento nacional oficial para presentar a la V Reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 5). El ejercicio permitió realizar un balance interno del trabajo en los organismos centrales del estado y en cada uno de los territorios, a partir de sus compromisos con el Plan de Acción Nacional y los Planes de Acción Provinciales.

Antecedentes como la celebración en La Habana de VI COP, el avance de la economía cubana así como la aprobación del Programa de Asociación en apoyo al PAN por parte del GEF, crearon un ambiente propicio que alentó el desarrollo de las acciones en el País. Un Taller Nacional de validación de la información, celebrado del 8-12 de mayo de 2006, resumió el proceso interno que incluyó un análisis valorativo del cumplimiento de las acciones programadas y permitió actualizar y dimensionar las acciones futuras.

Estrategias y prioridades establecidas en el marco de los planes o políticas de desarrollo sostenible.

La Estrategia Nacional Ambiental (EAN), en fase de actualización, continúa siendo el documento directriz de la política ambiental cubana. Constituye la expresión nacional de los compromisos fundamentales ambientales internacionales, adquiridos a través de los Acuerdos Multilaterales Ambientales dirigidas al desarrollo sostenible. Su expresión territorial, las

Estrategias Nacionales Sectoriales (EAS) y Territoriales (EAT), representan un serio esfuerzo para abordar los problemas ambientales de manera integral a través del impulso y el apoyo financiero aportados por el Plan de la Economía nacional a través de los diferentes sectores económicos, el compromiso de las organizaciones sociales en su conjunto y el apoyo inestimable y decisivo de las comunidades y de la población. En las mismas se reflejan con nitidez y se acometen, para su solución, los problemas ambientales relacionados con los procesos conducentes a la desertificación y la sequía.

Durante el periodo analizado (2003-2005), se consolidaron los esfuerzos para el desarrollo de los Programas Nacionales de Conservación y Mejoramiento de Suelos, el Programa Nacional Forestal y el Programa de Ahorro y Uso Racional del Agua, los cuales tienen entre sus principales objetivos, el uso sostenible de los recursos naturales mencionados, la lucha contra la degradación de las tierras, el incremento de la superficie boscosa, y la lucha contra la sequía y la carencia de agua; y han venido dando un impulso sustantivo al cumplimiento de los objetivos del PAN. Se actualizó la Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica y su Plan de Acción, que incluye las acciones de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en las tierras semiáridas y subhúmedas secas del territorio nacional. Se considera de gran importancia la existencia de un Plan de Prevención y Mitigación para Desastres Naturales como complemento al Sistema Nacional de Alerta temprana contra la Sequía.

Todas estas acciones, que son parte integral de los marcos de la gestión ambiental, se desarrollan con la activa y efectiva participación de los miembros del Grupo Nacional de Desertificación y Sequía, grupo que se ha fortalecido y consolidado en su gestión de integración y coordinación interinstitucional para llevar adelante el Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía aprobado en el año 2000

Medidas Institucionales adoptadas para aplicar la Convención, incluidos los marcos o arreglos legislativos e institucionales, los vínculos y sinergias con otras convenciones sobre el medio ambiente y, en su caso, con las Estrategias Nacionales de Desarrollo.

Cuba firmó (15 de octubre de 1994) y ratificó (13 de marzo de 1997) la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Sequía. Como Estado Parte, dedica prioridad al tema y participa activamente en las acciones al nivel nacional e internacional. Los resultados fundamentales del trabajo de aplicación del PAN en las provincias se resume en que las 14 provincias del País y el Municipio Especial Isla de la Juventud, poseen Planes de Acción Provincial (PAP), elaborados con la más amplia participación de todos los actores y aprobados por los correspondientes gobiernos territoriales. La aplicación de los PAP, se chequean y evalúan periódicamente y sus resultados son informados a la comunidad y a los decisores.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es el Organismo de la Administración Central del Estado (OACEs) encargado de proyectar y velar por la ejecución de la política ambiental del país. Otros Organismos como el Ministerio de la Agricultura, Ministerio del Azúcar y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, son los encargados del manejo y uso sostenible de los recursos naturales a ellos confiados. Con vistas a mejorar las relaciones interinstitucionales en el ejercicio de sus funciones, evitar dualidades y lograr las sinergias necesarias entre los organismos y entidades, se crearon los espacios de coordinación al nivel técnico e intermedio de decisión, sin sustituir sus funciones particulares. Es así que los elementos de coordinación, tales como el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas, creado mediante Acuerdo 3139 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de fecha 8 de abril de 1997, como

el máximo Órgano Coordinador en materia de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas del territorio nacional; la Comisión Nacional de Reforestación y el Plan Turquino así como el Grupo Nacional de Lucha contra la desertificación y la Sequía, constituyen importantes espacios de coordinación integrada para el manejo de los recursos naturales al nivel de cuencas hidrográficas. Intervienen, de manera transversal, otros OACE como el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de la Industria Básica y los Órganos Locales de Gobierno, que completan las acciones territoriales.

Marco jurídico y reglamentario coherente y funcional

La protección legal de los recursos naturales en el ordenamiento jurídico cubano está dada por la legislación ambiental cubana que se conforma por normas legales y técnicas. Esta legislación se integra a partir de una ley marco (Ley 81: Del Medio Ambiente) que establece los principios, conceptos generales e instrumentos de la política ambiental, identifica las esferas de protección ambiental y la estructura institucional del país para la atención de esta temática. La misma se complementa con otras normas legales que en algunos casos fueron aprobadas como parte de la implementación de la derogada Ley 33 “De Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales” como es el caso del Decreto-Ley 138 “De las Aguas Terrestres”, y en otros fueron promulgadas como parte del proceso de implementación de la ley marco como el Decreto-Ley 201 “Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, la Ley 85 “Ley Forestal”, Decreto 268 “Contravenciones de las Regulaciones Forestales”, y la Resolución 330/99 del MINAGRI “Reglamento de la ley Forestal”.

Entre las disposiciones e instrumentos más recientes, se encuentra el Decreto Ley No. 170 sobre la reducción de desastres, concebido como el “Conjunto de actividades preventivas, de preparación, respuesta y recuperación, que se establecen con la finalidad de proteger a la población, la economía y el medio ambiente, de los efectos destructivos de los desastres”. Esto introduce un cambio conceptual en todas las etapas del proceso de reducción, sobre la base del conocimiento y manejo de los riesgos.

Al nivel internacional, los principales programas en los cuales Cuba participa, se ubican en el Plan de Acción Regional de América Latina y el Caribe, en particular en las seis Redes Temáticas (TPN) acerca de indicadores y sistemas de monitoreo, conocimientos tradicionales y energía alternativa. En el Programa de Acción subregional de La Hispaniola, el principal papel ha sido el de apoyar la elaboración del PANFRO entre la República Dominicana y Haití, impartir capacitación en ambos países y apoyar la elaboración del PAN de República Dominicana. En la actualidad se proyecta, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Convención, establecer la sede del Centro para la Capacitación y Entrenamiento sobre Manejo Sostenible de Tierras (MST) como una acción futura de carácter inmediato, que permitirá intercambiar con países de la región, sobre esta temática dentro del marco del Proyecto de Rehabilitación Ambiental con participación juvenil en el Caribe.

El proceso de participación en apoyo de la preparación y ejecución del programa de acción. En particular los procesos en los que participa la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias.

Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias aplican su plan de acción, al tener en cuenta las prioridades nacionales y locales del Programa de Acción Nacional, conocimiento que se adquiere y enriquece a través de las consultas y las relaciones sistemáticas

con el Grupo Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU) es el Punto Focal que liderea el trabajo de 20 organizaciones y asociaciones cubanas relacionadas con el tema.

Los principales indicadores de la gestión de las ONG se centran en la apropiación y diseminación de las lecciones aprendidas como resultado de las acciones realizadas y se expresan en modificación y creación de hábitos de relación con los recursos naturales y económicos; la aplicación de nuevos manejos relacionados con el mejoramiento de las condiciones ambientales locales, y el apoyo a la transmisión de conocimientos en función del aumento de los rendimientos agrícolas y de la calidad de la vida de los pobladores.

Proceso de consulta en apoyo a la ejecución del programa de acción nacional y los acuerdos de asociación con países Partes desarrollados y otras entidades interesadas, particularmente la movilización de recursos nacionales e internacionales.

En el contexto nacional y local las entidades Multilaterales del Sistema de Naciones Unidas que han acompañado el proceso del PAN, continúan siendo los representados por PNUD, FAO y PNUMA. El papel de estas Agencias, en el contexto del PAN, se ha centrado en el apoyo a los organismos nacionales para la captación del financiamiento de proyectos de desarrollo sostenible en varias zonas rurales del País y en el acompañamiento de las acciones que se emprenden en Cuba para la implementación del PAN. De gran importancia ha sido el acompañamiento del FIDA y el MG en el desarrollo de pequeños proyectos.

Una importante actividad de apoyo al trabajo nacional, se realizó durante la celebración en La Habana de la VI COP en el año 2003 y en el proceso de elaboración y aprobación del Programa de Asociación de País “Apoyo al Programa de Lucha contra la Desertificación y la Sequía”, a través del Programa Operativo 15 del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)

La firma de acuerdos bilaterales de cooperación mixta entre Cuba y otros países en desarrollo, aún cuando no se incluya la lucha contra la desertificación y la sequía como una actividad priorizada con identidad propia, sí se refleja en acciones colaterales en el ámbito del desarrollo sostenible. Tales elementos se ponen de manifiesto en la cooperación con países africanos y del Caribe insular.

Medidas adoptadas o planificadas en el marco de los programas de acción nacionales, en particular las destinadas a mejorar el entorno económico, conservar los recursos naturales, mejorar la organización institucional, mejorar los conocimientos sobre desertificación y vigilar y determinar los efectos de la sequía

En el contexto del Programa de Mejoramiento y Conservación de Suelos, se aplicaron medidas con diferentes niveles de complejidad, con vistas a detener los procesos de degradación y recuperar la productividad de los suelos como parte del desarrollo armónico de las áreas afectadas. Un ritmo de más de 10 mil hectáreas beneficiadas por año, a las cuales se les ha aplicado entre el 50 y 75% de las medidas requeridas para detener el proceso degradativo fundamental que le afecta, es el principal resultado del trabajo sostenido en los últimos años.

En general, el área física beneficiada, ascendió en más de 50 000 ha entre el 2003-2005. Ya sea por la ejecución de medidas temporales como de las permanentes de conservación. En materia de mejoramiento de suelos, se incrementó el área sembrada con abonos verdes en más de 30 000 ha

entre el 2003 y el 2005, en tanto que el mejoramiento con abonos orgánicos (compost, humus y estiércol vacuno fundamentalmente) para este periodo, fue superior, aplicándose una cifra por encima del millón de toneladas con relación al periodo anterior.

La cobertura forestal del país creció de 22,7 en el 2003 hasta 24,5% de la superficie total en el 2005, es decir, en cuatro años, hubo un incremento sustancial de la superficie boscosa, lo cual confirma que a nivel nacional, se ha revertido el proceso de deforestación, aunque aún existen áreas deforestadas pendientes de atención. La experiencia de las fincas forestales integrales, digna de ser reproducida en todo el territorio nacional por su repercusión económica, social y ambiental, tuvo una tasa de crecimiento de 300 fincas anuales, y que en la actualidad totalizan más de 1 200 fincas en funcionamiento.

Las pérdidas económicas por incendios forestales ascendieron a 103 millones de pesos en los últimos 5 años y afectaron 57 156 hectáreas de bosques. Estos peligros de desastres, reales y potenciales, determinaron la emisión y aplicación de medidas que prevé la planificación, organización y preparación del País para las situaciones de desastres naturales, los incendios en áreas rurales, especialmente los que ocurren en los bosques.

La actividad de mayor impacto realizada en los últimos cuatro años, ha sido la estrategia de enfrentamiento de las autoridades nacionales y territoriales a la fuerte sequía que afectó todo el país, pero fue particularmente intensa en las provincias orientales. Una drástica disminución de las reservas hídricas superficiales y subterráneas, provocada por déficit de lluvia mantenido en los últimos diez años, llegó a afectar en diferente grado a más de 2,5 millones de habitantes. Esta situación general motivó que el desarrollo de las estrategias en el país, para el enfrentamiento a la sequía, esté basada en tres aspectos esenciales: obras emergentes; obras y acciones estratégicas; programas de educación ambiental. En este sentido, durante el período 2003-2005 se entregó a la población afectada un promedio anual de 2 857.3 MM de M3 de agua. Se desarrollaron obras de gran envergadura, como los trasvases de agua entre cuencas hidrográficas situadas a más de 100 Km. de distancia, la construcción de acueductos, embalses, plantas potabilizadoras y desalinizadora, así como un minucioso control de la calidad de las aguas servidas. Además de las medidas señaladas anteriormente, resultaron definitivas las capacidades desarrolladas para evitar las enfermedades de transmisión hídrica, la muerte de personas por falta de agua y minimizar las pérdidas de animales y cultivos por efecto de la sequía.

El sistema de alerta temprana y los planes de contingencia cumplieron su papel para la toma de decisiones, en auxilio de las comisiones en las zonas de defensa, tanto en los territorios como a nivel nacional. Entre las medidas adoptadas para conservar los recursos naturales, se destaca la creación y desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). La implementación y funcionamiento del mismo ha constituido un eslabón esencial para garantizar la conservación in situ y el uso sostenible de la diversidad biológica y es objetivo importante de la política ambiental cubana, como Parte Contratante del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El sistema propuesto cubre aproximadamente 22 % del territorio nacional y comprende las áreas ubicadas en las zonas semiáridas y subhúmedas del País.

El estado cubano está interesado en lograr una correspondencia entre el ordenamiento territorial y el manejo sostenible de tierras. Se dispone del soporte jurídico, marcos normativos y organización administrativa a estos efectos. En los últimos cuatro años este sistema ha desarrollado importantes tareas como son la actualización de los diagnósticos territoriales, en todas las provincias; realización del Estudio Especial de Ordenamiento Territorial de la

Agroindustria Azucarera cuyas áreas productivas están ubicadas en las zonas semiáridas y subhúmedas secas; investigación sobre la Vulnerabilidad de los Asentamientos ante la Sequía y la evaluación de las áreas y objetivos a beneficiar por los sistemas de trasvase oeste-este y este-oeste.

La reconversión de la agroindustria azucarera, constituyó un ejercicio de suma importancia en el Manejo sostenible de las tierras agrícolas y un ejemplo del ordenamiento territorial sobre bases científico técnicas argumentadas. Permitió una mejor distribución de la tierra y un adecuado tratamiento social a los trabajadores azucareros vinculados con las áreas ordenadas.

Otro de los programas de alcance nacional considerado como una de las medidas adoptadas o planificadas en el marco de los programas de acción nacionales, es la Agricultura Urbana (AU), un movimiento productivo extensionista y un órgano auxiliar del estado para impulsar la producción de alimentos en 1 200 mil ha marginales y ociosas ubicadas en las ciudades, en los asentamientos poblacionales y su periferia, entre cuyos objetivos se encuentra la de contribuir con la seguridad alimentaria y disminuir la presión sobre las tierras agrícolas. Lograr una mayor visibilidad de los resultados en la lucha contra la desertificación y sequía, ha sido un objetivo de trabajo del PAN. El programa de sensibilización y comunicación puesto en marcha, permitió divulgar por diferentes vías, las lecciones aprendidas en el proceso de implementación. Se mantuvo un estrecho vínculo con los medios de comunicación a quienes se les suministró, de manera permanente, informaciones y datos acerca de los eventos de desertificación en el mundo y en Cuba, así como las acciones para detenerlos o mitigarlos.

Asignaciones financieras de los presupuestos nacionales en apoyo a la aplicación de la Convención así como asistencia financiera y cooperación técnica recibida y necesaria. Determinación de las necesidades y fijación de las prioridades.

Las inversiones relacionadas con el Programa de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, provienen fundamentalmente de los fondos estatales representados por el Plan de la Economía Nacional. Los incrementos indican un sostenido avance aunque las cifras continúan siendo insuficientes en comparación con las necesidades para cubrir las magnitudes de los problemas de degradación presentes en el territorio nacional. Las inversiones realizadas para mitigar los efectos de la más grande sequía padecida en los últimos años, muestran la voluntad del Gobierno y los esfuerzos realizados en la construcción de obras emergentes que permitió atender las necesidades de la población.

En la actividad de Mejoramiento y Conservación de Suelos, se observó una línea ascendente en las inversiones destinadas a las medidas sencillas y al enriquecimiento de los suelos con materia orgánica (incremento de 2,4 millones de pesos) La carpeta de proyectos de Cuba colocada en el FMAM, en particular en el área focal de Degradación de Tierras, tiene aprobados 10 millones de USD para Programa de Asociación de País, PIMS 3005 OP15 “Apoyo al Programa Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía de la República de Cuba” desde noviembre de 2005 con un cofinanciamiento del Gobierno cubano ascendente a 80 millones de pesos en moneda nacional por parte de las instituciones claves. A través del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica, también se ha obtenido financiamiento de suma utilidad.

Otros proyectos sinérgicos al PAN también han aportado su apoyo financiero, como son los casos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con 4.59 millones de USD, la tercera fase del proyecto Sabana Camaguey , ubicado en la zona norte del Centro del País con influencia en los

sectores agropecuarios y azucarero; el proyecto MIC y Cuencas Caribe, los cuales contemplan acciones en áreas agrícolas de la zona montañosa de la cuenca Hanabanilla, que tributa a la Bahía de Cienfuegos, con un financiamiento de 520 000 USD. Otra forma de prioridad lo constituye el Programa de Pequeñas Donaciones, donde interviene la sociedad civil, y cuyo objetivo es apoyar a pequeña escala, iniciativas de proyectos prometedores dirigidas por organizaciones no gubernamentales y comunitarias de base.

La movilización de recursos financieros no ha estado al nivel de las urgentes necesidades de este tema, a pesar que el Gobierno cubano ha demostrado una voluntad y empeño a desarrollar acciones concretas de recuperación de áreas y de prevención de los fenómenos. La movilización de los recursos externos continúa siendo insuficiente, aun cuando en los próximos años se podrá contar con los aportes provenientes del GEF y otras fuentes.

Examen y evaluación de los parámetros e indicadores utilizados para medir y evaluar los adelantos logrados.

Durante todo el desarrollo del PAN, se ha trabajado con los parámetros e indicadores tradicionalmente empleados en la evaluación del progreso de las medidas aplicadas en el Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de Suelos, el de Vigilancia y Control de la Calidad de las Aguas, en la dinámica forestal, en el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, así como en el Sistema de Vigilancia de la Sequía entre otros, provenientes de los resultados científico técnicos. Paulatinamente se incorporaron otros indicadores sociales y económicos que reflejaban en buena medida el comportamiento general del País. Estos indicadores continúan siendo deseables para la evaluación, sin embargo, los avances en la evaluación integral, tanto de los procesos como de los impactos, son discretos por la falta de un sistema integrado de monitoreo y evaluación y ante todo, porque no se ha logrado desarrollar la infraestructura necesaria para su aplicación sistemática.

Actividades científicas y técnicas de lucha contra la desertificación y la sequía. Aplicación de los acuerdos del Comité de Ciencia y Tecnología.

El Sistema de investigación científico técnica ha mostrado su eficiente apoyo al PAN. Más de 40 resultados han sido aplicados al quehacer cotidiano, tales como el Sistema Integrado para la Vigilancia, la Alerta Temprana y el Pronóstico de la Sequía en Cuba, resultados en la producción de alimentos y en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

Los acuerdos del Comité de Ciencia y Tecnología han tenido una atención especial a fin de adoptarlos en el contexto Nacional. Los temas de Alerta temprana; Parámetros e indicadores y Revalorización de tecnologías tradicionales y conocimientos locales así como su vínculo con las tecnologías modernas, han sido de gran importancia para la comunidad científica nacional, la cual ha jugado su papel en el análisis y evaluación de los resultados obtenidos por el PAN.

El mantenimiento y actualización de la Lista de Expertos, es una labor de continuidad desde 1998. Un grupo de expertos han trabajado en misiones técnicas en Haití, República Dominicana, Colombia, Perú y un mayor número en los diferentes Programas de Agricultura en colaboración con Venezuela. Un ejemplo de la labor nacional ha sido la participación de más de 200 expertos de instituciones nacionales y territoriales en la elaboración del PDF de Programa de Asociación en apoyo a la aplicación del PAN de la República de Cuba.

DOMINICA

In fulfilling its obligation to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) the Government of Dominica presents its Third National Report to the Convention secretariat. The Third National Report on the Implementation of the Convention was prepared by the Environmental Coordinating Unit (ECU) of the Ministry of Agriculture, Fisheries and the Environment.

The First National Report was submitted to the secretariat by 15 April 2000, while the Second National Report was submitted by July 2002 and were also prepared by the ECU. During the period following the submission of the Second National Report Dominica has taken firm steps to combat land degradation through the formulation of the following key Policy Documents:

1. Draft National Action Plan for Combating Land Degradation
2. Transforming Dominica into an Environmentally Sound Organic Island
3. Completion of Action Plan under the National Capacity Self Assessment

1. Draft National Action Plan for Combating Land Degradation

The Draft National Action Plan for Combating Land Degradation recognizes the linkage between poverty and land degradation. The key issues addressed in the Draft NAP are as follows:

- Sustainable forestry management
- Water resource management
- Sustainable land use management and zoning for sustainable development
- Sustainable agricultural practices
- Management of solid waste disposal
- Infrastructure development, especially along coastal areas
- National database on the environment
- Education and awareness
- Poverty reduction
- Legislation and enforcement mechanisms
- Institutional framework to support interagency collaboration

2. Transforming Dominica into an Environmentally Sound Organic Island

The objectives for the proposal for transforming Dominica into an Organic Island are:

- Establish a sound and sustainable basis for economic and social development;
- Reverse declining agricultural sector employment;
- Reverse the trend in decreasing revenue by establishing Dominica as world leader in the production of organic agricultural products;
- Increase employment opportunities and reverse the loss of trained and qualified specialists from the country;
- Address pressing environmental and natural resource management issues through the establishment of agricultural practices that will reduce the introduction of harmful substances into rivers and soils and promote sustainable land management;
- Implement key element of Dominica's Biodiversity Strategy and Action Plan;

- Establish an agricultural export market based on products that are free from genetically modified organisms (GMOs) thereby giving support to Dominica's commitments under the Cartagena Protocol;
- Improve rural development through the establishment of improved land management practices that support organic production.

3. Completion of Action Plan under the National Capacity Self Assessment

National Capacity Self Assessment (NCSA) covered the Convention on Biological Diversity (CDB), the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the UNCCCD.

The Action Plan elaborated out of the process of a National Capacity Self Assessment Project which covered and placed special emphasis on a Sustainable Development Strategy for Dominica as well as the enactment of Comprehensive Environmental Legislation to govern Environmental Management in Dominica.

Dominica is a Member of the Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) which has an Environmental and Sustainable Development Unit. Dominica also belongs to the Caribbean Community (CARICOM) Grouping within the region of Latin America and the Caribbean.

This report is based on the format provided by the UNCCD secretariat which includes strategies and priorities established within the framework of sustainable development plans and policies, the institutional measures taken to implement the Convention, participation and consultative process in support of the preparation of the National Action Programme, and partnership agreements with other country Parties, public awareness activities undertaken to improve knowledge and awareness on the issue of land degradation and the struggle to combat the same. This report is therefore an update of events and activities since the Second National Report prepared and presented in 2002.

DOMINICAN REPUBLIC

Los problemas ambientales del país han crecido en las últimas décadas. En la actualidad, una gran cantidad de especies de flora y fauna (biodiversidad) están amenazadas y en peligro de extinción. La mayoría de los suelos y las cuencas hidrográficas del país presentan problemas de deterioro en diferentes grados, además de que se ha incrementado de forma significativa la deforestación y la contaminación ambiental, entre otros problemas. Este deterioro ha y esta impactado de forma significativa las condiciones de vida de la población dominicana, amenazando sus posibilidades de sobrevivencia y generando un avance del proceso de desertificación, el cual afecta al territorio nacional con sus secuelas más severas en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas (Tierras Secas).

Este proceso de degradación de las Tierras Secas, el cual conlleva a la desertificación en la República Dominicana se encuentra presente en casi el 70 por ciento del territorio nacional (33,400 Km²), afecta directamente o indirectamente a más de 5 millones de sus habitantes, los cuales tienen amenazadas sus posibilidades de desarrollo, por el avance del proceso de desertificación en estas zonas.

Así mismo, la degradación de los recursos naturales guarda una estrecha relación con la pobreza. La pobreza genera deterioro ambiental y el deterioro ambiental a su vez genera pobreza (círculo vicioso). Las personas que viven en condiciones de pobreza, sobre todo en las zonas rurales, se ven obligadas a explotar de forma irracional los recursos naturales, debido a que tienen la necesidad de producir alimentos (tanto para su consumo como con fines comerciales), abastecerse de energía y disponer de materiales para la reparación de sus viviendas, entre otras necesidades.

Dado que la desertificación tiene múltiples causas y graves efectos y consecuencias, por lo que para combatirla se necesita de un amplio proceso participativo que involucre de forma conjunta al Gobierno, la sociedad civil y el sector privado. El Gobierno Dominicano conciente de esta situación y dispuesto a enfrentar la problemática, para tales fines esta en la fase de concluir la estrategia nacional de combate contra la desertificación, a través del Programa de Acción Nacional (PAN).

En el 2003, se crea el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), mediante el Decreto No. 146-03 y a través del decreto # 28-04, se instituye el reglamento para su funcionamiento. El GTI es el organismo encargado de dar seguimiento y coordinar al Programa de Acción de la Convención de la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía. Agrupa representantes de todos los sectores que inciden en la problemática y su solución, incluyendo a organismos gubernamentales (OG's), organizaciones no gubernamentales (ONG's), al sector privado productivo, organizaciones comunitarias, los gobiernos locales y organismos internacionales acreditados en el país. El GTI esta encabezado por el Punto Focal Nacional para la Convención, que en el país es el Sub-Secretario de Suelo y Agua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Durante el período 2002-2006, el Gobierno Dominicano, el Mecanismo Mundial de la UNCCD y el Centro de Inversiones de la FAO, continuaron apoyando el proceso del Programa de Acción Nacional mediante una fase piloto en la región fronteriza, conocido como el PAN-FRO (Programa de Acción Nacional Fronterizo). En el 2003, se realizo una Consulta Nacional de Coordinación y Cooperación que permitiera integrar los esfuerzos en la lucha contra la Desertificación y la Sequía en la Zona Fronteriza.

Durante 2004, se realiza todo un proceso de planificación y coordinación con miras a dar inicio a la formulación del programa de Acción Nacional (PAN). Se realizan varias actividades dentro de la cooperación sur-sur. Se desarrolla un amplio programa de participación en eventos relacionados con la UNCCD.

Iniciando en el 2005, se realizan talleres de capacitación para la elaboración del PAN, con la finalidad de fortalecer la capacidad del Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) y las Comisiones de Trabajo Locales (CTL). Se inicia, además, en diciembre de este mismo año, la formulación del Programa Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía. Este Programa esta siendo elaborado mediante un amplio proceso participativo, involucrando a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, al Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), a las Agencias de Cooperación y al Sector Privado. El documento de país estará consensuado y finalizado para la reunión de la CRIC VII a finales del 2006.

A finales del 2005, se crea la Comisión Combate de Desertificación, la cual es presidida por el Señor Vicepresidente de la República. La misma esta compuesta por varios secretarios de estado

y representantes de la cooperación internacional acreditada en el país, así como ejecutivos representativos de la Sociedad Civil (ONGs) y es apoyada por el Grupo Técnico Interinstitucional.

Las actividades relacionadas con la implementación de la UNCCD en el caso dominicano tienen la particularidad de focalizarse en tres (3) dimensiones; (a) Internacional, (b) Binacional, y (c) Nacional. En el ámbito internacional, la UNCCD ha vivido a través de los últimos años una actualización de su visión de futuro, es decir, a nivel operativo se ha visto que su ámbito de trabajo se ha ampliado. Ahora, se trabaja bajo la sombrilla conceptual de “Degradación de Tierras”, que es un concepto más amplio que desertificación, ya que abarca fases de prevención y mitigación que en una eventualidad resultaran en desertificación. Lo cual permite al país tener una ventanilla más amplia de oportunidades de apoyo financiero y técnico para mitigar nuestros problemas asociados con el tema.

Dentro de este contexto binacional fronterizo, se destaca el reforzamiento al marco normativo existente (Comisión Mixta Bilateral 1996; Subcomisión Mixta de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1998) de la cooperación a través del acuerdo de trabajo entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Medio Ambiente de Haití (2004), entre otros. Esto fortalece y permite enfrentar los problemas de degradación de los recursos naturales y de su impacto sobre las condiciones económicas de las poblaciones en la zona fronteriza.

Más aun, a nivel nacional, se elaboraron varios proyectos que iniciaron su ejecución a partir del 2005, se destacan entre otros; (1) Estado Dominicano-ACDI “Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Locales en Gestión Ambiental y Planificación en el Artibonito (FOGAP-Artibonito)”, (2) FMAM-Surfuturo-Estado Dominicano “Proyecto Demostrativo de Manejo Sostenido de Tierras en la Parte Alta del Sistema de Cuenca de Sabana Yegua”, (3) GTZ-Estado Dominicano “Proyecto Binacional de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca Transfronteriza del Río Artibonito”, (4) ACDI-CIDA-Estado Dominicano “Proyecto Binacional Manejo de la Cuenca del Artibonito”, (5) FMAM-OAS-UNEP-UNESCO-Estado Dominicano “Proyecto Binacional Manejo Aguas Subterráneas de la Cuenca del Artibonito”, (6) FMAM-UNDP-FAO-Estado Dominicano “Proyecto Binacional Manejo de la Cuenca del Artibonito”, (7) FMAM-UNDP-Estado Dominicano “Desarrollo de la Capacidad para el Manejo Sostenible de la Tierra (SIDS LDC)”.

ECUADOR

1. Introduction

With the ratification of the Convention to Combat Desertification (UNCCD) on September 16, 1995, Ecuador made a commitment to develop a series of actions to prevent desertification, understood as the loss of productivity of natural resources, and to reduce the effects of this phenomenon in the zones where it had already happened. The country faces severe environmental and social problems derived from the inadequate use of the soil, water and biodiversity resources and a bad distribution of wealth. Therefore, in compliance to the commitments made upon confirming the UNCCD, Ecuador is contributing to face the problems of sustainable development in the country.

The social characteristics of Ecuador reveal a growing population density and high poverty indexes. Although the growth of the population has slowed in the last years, this quadrupled between 1950 and 2001 (going from 3 202 557 to 12 156 608 inhabitants).. Poverty according to the basic needs, and according to the area of residence, reached 86.1% of the rural population and 46% of the urban population between 1990 and 2001. Although the majority of the population is urban (61.1%), the majority of poor people still reside in the rural areas (54.4%).

The political and economic context of the country has not helped in the compliance of the country's obligations under the UNCCD. This last decade has been characterized by acute democratic instability and the public and private debt has limited the State from making investments in key sectors such as environment. Regardless of this the country has made important efforts to improve the conditions and quality of life of its inhabitants, and has developed initiatives in favor of the conservation of a healthy environment.

2. Strategies and priorities established within the context of the plans and/or policies of sustainable development

In this respect and with the objective of keeping the commitment made in relation to the objectives of the Millennium, the National Government, with Executive Decree No.294 declared in the year 2005 as State policy to comply with objectives of the Millennium of the organizations of the United Nations. With this in mind, it created the National Secretariat of the Millennium Development Objectives (SODEM), which is a coordination organization of the Ministries and other State organizations, to articulate public policies in this subject and to define an agenda that allows its compliance. Objectives 1 and 7 – to eradicate extreme poverty and hunger and to guarantee environmental sustainability, respectively – constitute the nexus to integrate the National Fight Action Plan with other national strategies such as the National Strategy against Poverty, the National Policy and Strategy of Biodiversity. Also, the Government of Ecuador, through its Social Front, has defined what is called “Agenda Ecuador Solidario 2006”, of which the Environment Ministry is part of.

3. Institutional measures taken to implement the Convention

Ecuador has developed a series of measures to advance the construction of the institutionalization that allows the implementation of the Convention:

- establishing and running the National Coordination Organization (NCO) and the preparation of the National Action Plan against Desertification (NAPD);
- development of a legal frame that creates a scenario favorable to the fight against desertification;
- the institutionalization of the Environmental Authority that allows an adequate follow up and facilitation for the implementation of the UNCCD and to establish and take advantage of the synergy with the Convention on Biodiversity and the United Nations Framework Convention of Climate Change.

The NAPD was approved in September 2004, after a lengthy process of national consultations to discuss and validate the proposal that started in October 1995. Several organizations and cooperation agencies gave support to this process with financing and technical assistance: Interamerican Development Bank (BID), Fundación Grupo Esquel of the United States, John D. and Catherine MacArthur Foundation, the Royal Embassy of the Netherlands, the Food and

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the United Nations Office of Fight against Desertification (UNSO), the United Nations Volunteer Programme, Fundación EcoCiencia, and Fundación Arco Iris.

Parallel to the proposal of the NAPD preparation, the country has developed discussion processes about the structure and roles of the NCO. After various discussions, the NCO in Ecuador will be called National Committee of Technical Coordination and Implementation of the UNCCD (CNLD) and will be formed by 16 organizations of public and private nature. The Agreement to approve the formation of this organization is in process of revision by the environmental authorities and is expected to be approved in the middle of the present year.

Additionally to the environmental normative mentioned in the National Reports for the years 2000 and 2002, in Ecuador there are legal instruments that, without being specific on the subject of the Convention, provide a legal frame for its implementation. As such, in 1998 the New Political Constitution of Ecuador was decreed (see Official Register No. 1, 11 of August 1998); the Special Decentralization and Social Participation State Law (O.R. No. 169 of October 8, 1997); Organic Law of the Juntas Parroquiales rurales (O.R. 193 October 27, 2000), and its regulations; the Organic Law of Municipal Regime; the Provincial Regime Law, among the main ones. In respect to the normative regulations, the Environmental Ministry, MAE, promoted the issuance of various executive decrees and ministerial agreements contained in the Unified Text of the Secondary Environmental Legislation (2003) (Second Book, "On Biodiversity") which more than make the laws operational and to regulate aspects of the Forestry Law and Environmental Management Law, looked simultaneously, to make the constitutional mandates viable as an alternative way in view of the difficulty of getting the legislative and executive powers to approve projects such as the Special Conservation and Biodiversity Sustainable Management Law or the Sustainable Forestry Development Law Project.

In a more specific level, the Environmental Ministry and in particular the Biodiversity and Protected Areas Direction, the governmental department that functions as the national focal point of the UNCCD, has developed some strategic initiatives that show concrete advances in the subjects relevant to the Convention. These actions have been obtained through cooperation processes with international assistance and the national organizations that work in subjects relevant to the UNCCD.

4. Consultative process for supporting the preparation and implementation of the NAPD and measures adopted or planned within the context of the NAPD

Even before the approval of the NAPD and once it was approved, the country put into effect some actions that contributed to its implementation. In these four years some actions have been advanced in the lines 2, 3, 5 and 6 of the Plan, which are Science and Technology, Education and Communication, Participation and Institutionalization and Financial Resources, respectively. These activities were done in the framework of various projects and programmes.

Among the most relevant there are: the "Regional Programme of Fight against Desertification in South America" (TC-01-01-07-2-RG), cofinanced between the IDB and the Special Fund of the Government of Japan; the execution was in charge of the Interamerican Agricultural Cooperation Institute (IICA Brazil) with the technical support of the Esquel Brazil Foundation Group and the Representatives of the UNCCD National Focal Points of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador and Peru and the Executive Secretariat of the UNDC. This Project had the general

objective of setting solid bases to deal with the arid land deterioration and the aridness of the countries. The duration was in principle two years, which was extended until November 20, 2006. The main results in Ecuador are the definition and identification of 41 national and local indicators for the evaluation of the desertification processes, of which 22 were incorporated to the proposal to be used for the Programme and the six countries involved.

For the evaluation of those indicators in the local and national levels, it is necessary to conform alliances with institutions and investigation centers specialized in the thematic, to be able to develop systematic follow up and evaluation processes. The non-governmental organizations (NGOs) can cooperate adopting the methodology and indicators proposed in the implementation and evaluation of the different management and investigation projects which are carried out in the arid and semi arid zones of the country. Additionally, as part of the Project a Training Programme has been developed, directed to three groups of key actors: peasants and community leaders; technicians of academic and research institutions, NGOs and local and provincial authorities; and decisions makers. Through this programme the purpose is to contribute to elevate the level of conscience and sensitivity of the community in front of the ecologic problems related to the desertification, by developing instruments to assist the local communities in the definition of the causes and effects of the phenomenon. The Programme includes the identification, analysis and application of environmental and socio-economic indicators in the pilot area, which for the Ecuadorian case is the province of Loja.

The second Project is the “National Auto-evaluation of the Needs of the Capacity Strengthening Ecuador NCSA” (ECU/O3/G31). This Project is financed by the Global Environmental Facility (GEF), through the United Nations Development Programme (UNDP). It was carried out between July 2003 and July 2005. The project sought to identify, characterize and prioritize the needs to strengthen the national capacity to cover the global environmental problems, in particular the loss of biological diversity, climatic changes and desertification. Among the expected products and results are the definition of an Action Plan with subjects and synergy among the three Conventions. An important aspect of the project was the support given for the promotion and knowledge of the UNCCD nationally.

Finally, a third Project that intends to involve the private and public sector is: “Support to the implementation of the UNCCD and other Conventions in a local level through mechanisms of payment for environmental services, with emphasis in the carbon kidnapping”. This regional Project is carried out in the framework of the Binational Peru-Ecuador Development Plan, and is financed by the Global Mechanism in association with local organizations such as the National Environmental Fund (FONAM in Peru) and CORDELIM (the Clean Development Mechanism Office of Ecuador) and Ecosecurities. This cooperation initiative supported the development of methodological viewpoints and tools for the identification, design, negotiation and implementation of local projects of compensation for environmental (PES) under the UNCCD and as a contribution to the implementation of the NAPD. To date, the elaboration of two projects has been supported in zones affected by the desertification and aridness processes and assistance will be given for the implementation in one of them, in the province of Manabí.

5. Financial contributions from the national budgets to support installation

In spite of the actions mentioned, the financing of the implementation of the NAPD and the commitments derived from the ratification of the Convention have been minimal, compared to the dimension of the problem. This continues to be the main aspect to resolve in the country as

well as by institutions and organizations interested in the fight against desertification. It is urgent to secure the financing of a basic technical team in the Environmental Ministry, which among its priorities must start an aggressive coordination process of the cooperation organisms, in order to reorient the investment to this subject; as well as to coordinate with the other environmental conventions to develop synergy that will allow the planned actions to be carried out. Finally it is required to continue with the search of new financing mechanisms.

EL SALVADOR

El Tercer Informe Nacional sobre la implementación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación y la Sequía en El Salvador indaga sobre los principales logros, avances, obstáculos, retrocesos y nuevas dinámicas que se han desarrollado desde la presentación del Segundo Informe Nacional en 2002, como resultado del fenómeno de la degradación de las tierras. Este Tercer Informe, al igual que los anteriores, contiene los siete Capítulos que abarcan los tópicos comunes de la Convención.

En el Capítulo 1 se reportan las estrategias y prioridades establecidas en el marco de los planes o políticas de desarrollo sostenible. Se pueden establecer dos fenómenos: primero, que aún falta insertar de manera más directa las estrategias establecidas por la UNCCD en los planes o políticas de desarrollo sostenible del país; y segundo, se requiere un esfuerzo más concertado para que el fenómeno de la sequía en El Salvador y sus consecuencias sea percibido en su verdadera seriedad y dimensión, tanto por los tomadores de decisiones como por la sociedad salvadoreña en general.

Hace un análisis comparativo de las características de pobreza de los municipios con mayores niveles de afectación por sequía, y plantea la contradicción entre pobreza y sequía la cual es aliviada por las remesas familiares enviadas por los emigrantes en el exterior, especialmente en el departamento oriental de La Unión. De esto se pueden derivar algunas medidas para que las dinámicas creadas por las remesas de los emigrantes se conviertan en un instrumento para revertir el deterioro de las tierras, como un elemento clave del desarrollo local.

El Capítulo 2 trata sobre las medidas institucionales adoptadas para aplicar la Convención, incluidos los marcos o arreglos legislativos e institucionales, los vínculos y sinergias con otras convenciones sobre el medio ambiente y, en su caso, con las estrategias nacionales de desarrollo. Aquí se describen las diversas medidas realizadas hasta la fecha para implementar la Convención a nivel nacional y local mediante proyectos y actividades que permitan mejorar las condiciones ambientales y socioeconómicas de los salvadoreños que viven en las zonas afectadas por sequía, como resultado de los usos insostenible del suelo que culminan en la degradación paulatina de las tierras. El informe sostiene que la ausencia de un adecuado marco jurídico no contribuye a una adecuada implementación de la UNCCD lo cual, al mismo tiempo, no permite crear las bases para una sostenida y progresiva rehabilitación de las tierras degradadas.

El Informe examina los beneficios del “Proyecto Sinergias” para las Cuatro Convenciones ambientales marcos: Biodiversidad, Cambio Climático, Desertificación y Humedales que de manera conjunta intentan generar resultados de mayores beneficios y en el caso de la UNCCD persigue mejorar la productividad de los suelos erosionados y disminuir las sequías. Sostiene que las actividades desarrolladas dentro de este nuevo marco de acción mediante sinergias

pueden contribuir a viabilizar algunas apuestas estratégicas para el desarrollo sostenible futuro del país.

Con respecto al Capítulo 3 se informa sobre el proceso de participación en apoyo de la preparación y ejecución del programa de acción, en particular los procesos en los que participan la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias. Esta parte sostiene que la participación de diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones comunitarias se está ampliando y se abren las oportunidades para nuevos actores como la empresa privada. Aunque se reconoce una menor participación de las organizaciones no gubernamentales en el ámbito nacional y local.

Asimismo, el Capítulo 4 trata sobre el proceso de consulta en apoyo de la preparación y ejecución del programa de acción nacional y los acuerdos de asociación con países Partes desarrollados y otras entidades interesadas, en particular la movilización y coordinación de los recursos nacionales e internacionales. En este apartado se analiza los diversos esfuerzos de la convención para mantener y aumentar el proceso de consulta con los diversos actores de la sociedad salvadoreña y que muestran las dificultades que se han tenido para establecer acuerdos de asociación y de cooperación para obtener más recursos financieros, técnicos y materiales.

En el Capítulo 5 se detallan las medidas adoptadas o previstas en el marco del programa de acción nacional, en particular las destinadas a mejorar el entorno económico, conservar los recursos naturales y promover su uso sostenible, rehabilitar las tierras degradadas, mejorar los conocimientos sobre la desertificación y la lucha contra la misma y vigilar y determinar los efectos de la desertificación y la sequía. Analiza cómo las medidas previstas en el marco del PANSAL pueden impactar en el entorno económico, en los recursos naturales y su uso sostenible, en la rehabilitación de las tierras degradadas, en mejorar los conocimientos sobre la desertificación y sus efectos ambientales y socioeconómicos. Estas medidas se enfrentan con la limitación de carecer de fondos nacionales propios que impiden su efectivo cumplimiento.

Con relación al Capítulo 6 se explican las asignaciones de créditos de los presupuestos nacionales en apoyo de la aplicación de la Convención y volumen de la asistencia financiera y la cooperación técnica, incluidas sus entradas. Procesos para determinar sus necesidades y esferas de financiamiento y establecer las prioridades. Se considera que las asignaciones presupuestarias para aplicar la UNCCD constituyen el motor de cambio que le pueden abrir oportunidades a la superación de la crisis derivada de la sequía y que este cambio debe ser un componente fundamental de una sociedad que le apuesta más a la “prevención” que a la “curación” de los efectos dramáticos de la sequía.

Finalmente el Capítulo 7 aborda el examen y evaluación de los parámetros e indicadores utilizados para medir y evaluar los adelantos logrados. Aquí se analiza diferentes esfuerzos para evaluar de manera periódica los parámetros e indicadores y el monitoreo de datos estadísticos, mediante una matriz; Estos esfuerzos son claves para definir políticas, programas y proyectos del Estado salvadoreño y de otros actores para fortalecer las diferentes áreas ambientales, incluyendo una revisión del debate sobre el clima salvadoreño, las sequías y sus impactos socio ambientales.

GRENADA

Grenada, Carriacou and Petite Martinique became a Party to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) on 27 May 1997. This commitment was made in light of growing evidence that the integrity of land resources is critical to the economic development of the nation. This was further emphasized following the passage and subsequent impact of Hurricanes Ivan in 2004 and Emily in 2005, when the agricultural sector experienced significant damage resulting in as much as 50% loss of land resources.

The purpose of this report as required under Article 26 of the UNCCD, is to inform the Conference of Parties of the progress made and constraints experienced in implementing the UNCCD at national level. Grenada submitted its First and Second National Reports in 2000 and 2002 respectively, and completed a final draft of its National Action Programme (NAP) in 2005, which was subsequently approved in April 2006. The NAP is intended to promote both the conservation and responsible use of Grenada's land assets.

Discussions with the National Focal Point indicated that activities relating to land degradation are being conducted, but not within the formal UNCCD framework. The consultation also revealed the following challenges with regard to implementation of the UNCCD:

1) Institutional arrangements for an enabling environment to implement UNCCD

The institutional arrangements to implement the UNCCD at country level have progressed with the appointment of a National Focal Point and the establishment of a National Coordinating Body. However, the lack of appropriate resources and enabling mechanisms are obstacles affecting full compliance with the Convention guidelines. Early attention is necessary to facilitate effective implementation of the UNCCD.

2) Improved Mobilization of Resources

The present status of Grenada's human and financial resources requires the mobilization of significant additional financial and technical resources to develop the capacity necessary to elaborate the UNCCD and implement the NAP. This should be given absolute priority in the early stages of the Programme.

3) Capacity Development

Grenada's public, private and NGO sectors experience shortages of expertise in the areas relevant for effective land management. It is necessary to develop capacity at the human, technical and institutional levels for effective implementation of the NAP. However, there are plans to address these shortcomings, which will also be complemented by a programme on public awareness and education, as well as career guidance efforts.

4) Improving the Agricultural Sector

Prior to the passing of hurricane Ivan the growth and development of the agricultural sector had been constrained by an inadequate policy and weak institutional framework, and consequently adapting to market liberalization proved challenging. The destruction of the agriculture sector

by hurricane Ivan has exacerbated the situation. It is therefore critical that an overarching policy framework be developed to encourage agricultural practices that conserve the land resource.

5) Research capabilities

Research and information are integral to planning, management, identification and monitoring of land resources. Unfortunately, the absence of local expertise and adequate institutional and financial capacity affects the quality of research in Grenada. Indicators for monitoring, and mechanisms for the collection, analysis and dissemination of information are yet to be developed.

6) Consolidation of the Policy, Legal and Administrative Framework

The policy and legislative framework on land management is outdated, incomplete and inadequate insofar as recent developments in the field are concerned. Strengthening this foundation is critical to sustainable land management and review and rationalization of legislation is yet to be completed.

7) Public Awareness and Education

Although public awareness in Grenada is fairly high, education and outreach are needed to instill environmental values and encourage a sense of ownership, to reduce threats to land resources, and encourage public involvement in the implementation of activities to combat land degradation.

GUATEMALA

La adición de Guatemala como Parte de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Sequía cobró vigencia mediante el Decreto Ley número 13-98 del Congreso de la República el 25 de Marzo de 1998. Desde entonces, el Estado de Guatemala ha sido representado en las actividades relativas al convenio mediante la designación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como institución de enlace. Para los efectos oficiales de representación ante la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), la responsabilidad de funcionario de enlace nacional corresponde ser ejercida por el Señor Ministro como titular del MARN; misma que desde el año 2004 ha recaído en el Licenciado Juan Mario Naguib Dary Fuentes, quien actualmente desempeña sus funciones en el despacho ministerial ubicado en el edificio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales sobre la 20 calle 28-58 Zona 10 en la ciudad de Guatemala.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales fue creado mediante el acuerdo gubernativo 90-2000 y es la institución de Gobierno responsable de ejercer la rectoría en los temas relativos al ambiente y los recursos naturales. Le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo; cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país, así como el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural.

En referencia al tema específico de Lucha contra la Desertificación y Sequía, ha sido el MARN quien ha desarrollado en el marco de la Convención las diferentes actividades de organización para su implementación así como la preparación de materiales informativos sobre los logros y avances que se presentan ante la Secretaría permanente del convenio; para ello se vale del rol de rectoría que le ha sido designado, a fin de coordinar inter institucionalmente actividades con otros actores respetando las competencias de cada uno.

Las principales actividades que se han desarrollado tanto fuera como dentro del marco de cumplimiento de los compromisos adquiridos desde la ratificación del convenio han sido: a) Diagnóstico situacional sobre el problema de la desertificación y sequía; b) Elaboración del Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y Sequía; c) Ejecución de la asistencia preparatoria del proyecto Revirtiendo la Degradación de Suelos en Departamentos y Territorios Indígenas Vulnerables a la Sequía en Guatemala; d) Ejecución del proyecto Auto Evaluación de las Capacidades Nacionales para el Manejo del Ambiente Global; e) Ejecución del proyecto Implementación de Actividades del Programa de Acción Nacional de lucha contra la Desertificación y Sequía.

El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía (PROANDYS) fue elaborado y validado en el año 2001 por el MARN a través de un ejercicio participativo con actores relevantes que aportaron valiosos insumos para ser elaborado, del cual existe una versión definitiva que fue presentada a la Secretaría permanente de la CNULD y que se encuentra disponible en el portal web <www.unccd.int>. Los lineamientos del PAN contenidos en cada uno de sus componentes se integran de manera armonizada a las estrategias de reducción de la pobreza elaboradas tanto a nivel nacional como departamental, principalmente en aquellos departamentos que padecen amenaza y son más vulnerables a los efectos de la desertificación y la sequía, teniendo por objeto la creación de condiciones que fortalezcan las bases para potenciar una visión de país para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio para el año 2015.

A pesar de que el documento del PROANDYS es oficial desde el año 2001, para Diciembre del año 2005 no se había ejecutado ninguna actividad relativa a su implementación teniendo que los logros y avances existentes hasta la fecha en la Lucha contra la Desertificación y Sequía han resultado en esfuerzos aislados y sin coordinación tanto a nivel individual, institucional como sistémico. No obstante, en el año 2006, se inició una serie de medidas institucionales que han recibido el respaldo tanto del Gobierno Central como de organismos internacionales, con el objeto de implementar diferentes actividades tendientes a la aplicación del Programa de Acción Nacional, así como sensibilizar a la sociedad a través de información relativa al problema de la Desertificación y Sequía en Guatemala.

Entre las principales actividades definidas para el efecto destacan: a) Difusión de los contenidos del PAN; b) Celebración del año mundial de los desiertos; c) Encuentros de intercambio de experiencias con grupos de agricultores y promoción de buenas prácticas de manejo de la tierra para la Lucha contra la Desertificación y Sequía; d) Elaboración y gestión de proyectos para la aplicación en campo del PROANDYS, entre otras. Por la trascendencia de estas actividades, se ha considerado preciso que durante su desarrollo se promueva una participación multisectorial de actores y partes interesadas, de manera que se incluya una amplia gama de representantes de instituciones de Gobierno, organismos no gubernamentales, organizaciones comunitarias, centros académicos, investigadores y expertos, sector privado, autoridades locales y medios de comunicación.

Para el efecto, estas actividades se están desarrollando a través de la infraestructura operativa del MARN por medio de sus delegaciones departamentales, los cuales convocan a los actores locales pertinentes. Es importante mencionar que debido a las pocas acciones de ejecución del Organismo de Coordinación Nacional (OCN) con respecto a la implementación del convenio, principalmente del PAN, actualmente no existe un comité de coordinación de acciones o red de actores activos en el tema de desertificación; lo cual se espera sea un producto que se alcance con la culminación de las actividades que se desarrollarán en el año 2006.

En Guatemala, la problemática socioeconómica asociada a los efectos de la desertificación y sequía, alcanzó su punto más alto durante el año 2002 cuando los municipios de Jocotán y Camotán en el departamento de Chiquimula, experimentaron eventos extremos de hambruna causados por períodos prolongados de sequía que originaron un estado de calamidad exponiendo los efectos que tienen sobre la sociedad la degradación del ambiente y los recursos naturales.

A partir de esta situación de hambruna, el Estado de Guatemala tomó medidas urgentes que permitieron atender la emergencia así como la prevención de las causas; de esa cuenta, se realiza una priorización de 108 municipios en situación de pobreza y extrema pobreza hacia los cuales se orientan los esfuerzos interinstitucionales de prevención y mitigación de la inseguridad alimentaria.

Entre los esfuerzos de tipo sistémico que fueron implementados a partir de entonces se tienen: a) Política de Desarrollo Social y Población; b) Política Agraria y Sectorial (2004 – 2007); c) Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; d) Creación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional; y e) Estrategia gubernamental ambiental “Guate Verde”. Por su parte, de manera institucional el MARN desarrolla con el apoyo financiero del Reino de los Países Bajos la formulación de la Política Nacional de Protección, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales, a través de la cual se definen acciones estratégicas que permitirán la recuperación de áreas y ecosistemas degradados que son particularmente vulnerables a procesos de desertificación y sequía. Así también se encuentran en fase de gestión dos proyectos que permitirán potenciar las acciones del país en el marco de la CNUCLD, los cuales se espera sean apoyados por el Reino de los Países Bajos y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) respectivamente, siendo estos: a) Fortalecimiento del MARN para la implementación del Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y Sequía en Guatemala; y b) Revirtiendo la Degradación de Suelos en Departamentos y Territorios Indígenas Vulnerables a la Sequía en Guatemala.

Cada uno de los anteriores persiguen objetivos definidos que se verán complementados en la ejecución con las acciones de Pago por Servicios Ambientales que el Fondo Guatemalteco de Ambiente (FOGUAMA) realizará a partir del presente año y que serán enfocadas a la protección de bosques y fuentes de agua inicialmente en la región Oriental del país que es la más amenazada por procesos de Desertificación y Sequía, con lo cual se esperan avances significativos en el marco de la Convención, principalmente en las regiones rurales del país que mayor degradación de sus recursos naturales presentan.

GUYANA

Desertification is one of the world's most alarming processes of environmental degradation. Each year, desertification and drought cause an estimated \$42 billion in lost agricultural production. The risks of desertification are substantial and clear. It contributes to food insecurity, famine and poverty, and can give rise to social, economic and political tensions that can cause conflicts, further poverty and land degradation. Desertification and land degradation is recognised as an important concern by most countries and a critical issue for many.

The international community has long recognized that desertification is a major economic, social and environmental problem of concern to many countries in all regions of the world. The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) was adopted in Paris on June 17, 1994 and entered into force on December 26, 1996. The UNCCD places human beings at the centre of its concern to combat desertification and mitigate the effects of drought. It recognizes that National Governments play a critical role in combating desertification and mitigating the effects of drought and that progress depends on local implementation of programmes in affected areas.

Guyana ratified the Convention on 24 September 1997. Land degradation in Guyana, while perhaps not very visible at this stage, has been increasingly occurring and the potential exists for it to expand at an increasing rate corresponding to an increase in the exploitation of natural resources and coastal erosion. Change in land use has been due to a rapid upsurge in economic activity over the last 10 years, in particular the sectors of forestry, mining, and agriculture with the expansion in state land leases for agriculture and commercial activities.

As a Party to the Convention, Guyana is expected to prepare national reports on steps taken to implement the Convention. The first two National Reports to the Convention were submitted in April 2000 and April 2002. This Third National Report has been done in accordance with the guidelines prepared by the Convention secretariat and reports on key actions and initiatives that have taken place since the last national report in April 2002. There have been a number of significant developments with regard to moving forward to meet UNCCD obligations. Principal among them have been:

1. A Change in the National Focal Point

During the period 1997 to 2003, the Hydrometeorological Division of the Ministry of Agriculture (Hydromet Division) served as the National Focal Point for the UNCCD. The main reason the Division was identified as the focal point was that in the early stages of the UNCCD the focus of the Convention was principally on desertification with a close relation to climate change, hence Hydromet was the most appropriate organisation.

In 2003 the responsibilities of the National Focal Point were transferred from the Hydrometeorological Division of the Ministry of Agriculture to the Guyana Lands & Surveys Commission (GLSC) after it had been established as a Commission with direct responsibility for land management and reporting to the Office of the President.

2. Establishment of a National Coordinating Body

In 2003 when the National Focal Point responsibilities were handed over the GLSC, a National Steering Committee (NSC) was established with oversight responsibility for the implementation

of the UNCCD activities. This Committee comprises the following institutions:

1. Guyana Lands and Surveys Commission (National Focal Point)
2. Guyana Forestry Commission
3. Guyana Geology and Mines Commission
4. Environmental Protection Agency
5. Civil Defence Commission

3. Execution of a National Awareness Seminar

With support from the UNCCD secretariat, a National Awareness Seminar was held in September 2005 at which there was broad stakeholder participation and input which set the basis for development of Guyana's National Action Programme.

4. National Capacity Self-Assessment of UNCCD

Through the National Capacity Self Assessment Project (NCSA) Project, which is being funded by Global Environment Facility (GEF) through the United Nations Development Programme (UNDP), a Stocktaking and Thematic Assessment was done with respect to the UNCCD. The Stocktaking and Thematic Assessment, which was conducted at three levels, (1) Individual, (2) Institutional and (3) Systemic, analysed Guyana's national capacity needs, priorities and constraints in meeting the obligations of the Convention.

5. Preparation of a National Action Programme (NAP)

A 5-Year National Action Programme has been prepared for the UNCCD and approved by the Board of the GLSC on April 27, 2006. The preparation of the NAP involved stakeholder involvement and review by the NSC.

6. Preparation of a project proposal for assistance under the least developed countries–small island developing States (LDC-SIDS) Portfolio Project for Sustainable Land Management.

A proposal for a project costing US\$ 660,000 is being prepared for funding from GEF/World Bank and facilitated by UNDP through the LDC-SIDS Portfolio Project for Sustainable Land Management. The principal objective of this project is to strengthen the enabling environment for sustainable land management (SLM) through ensuring broad-based political and participatory support for the process with three main outcomes of (1) increased and enhanced capacity at the individual and institutional level for SLM, (2) mainstreaming and harmonization of SLM into the development framework and (3) investment planning and resource mobilization for implementation of SLM.

Since the last national report in April 2002, there have been a number of initiatives across sectors within the framework of natural resources, environment and land management. These have been elaborated within this report.

While efforts are underway to move forward with UNCCD implementation, there are a number of priority issues to be addressed in order to prevent and mitigate land degradation and desertification and to move towards SLM. These issues are outlined as follows:

1. The need for a Land Use Policy to set the overarching framework for sustainable land management. It is expected that this policy will identify guidelines for land use as well as criteria for multiple land uses.
2. The need for capacity building and institutional strengthening of the GLSC and other agencies for sustainable land management and to meet UNCCD obligations.
3. The need for a more proactive National Steering Committee for UNCCD in spite of good collaboration and cooperation among members.
4. The need to mobilise funds to implement the NAP, perhaps through developing a financing strategy to draw on regional and international mechanisms.
5. A concerted and sustained effort towards education and awareness to address the generally low level of awareness and knowledge of land degradation in other agencies, government institutions and society at large.
6. The need for a comprehensive study and assessment of the current land uses and practices and factors contributing to land degradation along with information gathering and developing a national clearing house (Focal Point) for information regarding land use, and land degradation. As well, there is need to develop early and forecasting warning systems for droughts and floods.
7. The need for the harmonising of legislation and institutional framework for sustainable land management and land use planning.
8. The need to improve institutional cooperation and collaboration for sustainable land management and better linkages between government agencies and non-governmental organizations (NGOs) and civil society for sustainable land management.

Guyana has built momentum in its efforts to move forward with addressing the issue of land degradation within the framework of sustainable land management. In meeting its UNCCD obligations the NAP outlines a comprehensive framework which sets the basis for action initiatives and establishes synergies and mechanisms for institutional and sectoral collaboration and cooperation. However, for this momentum to be maintained, capacity building and ultimately, financial resources are critical. Innovative mechanisms will need to be developed to maximize Government's in-kind contribution and those from donors while at the same time integrally involving NGOs and private sector.

HAITI

One of the largest Caribbean nations, Haiti has 27,750 square kilometres of land area including four large offshore islands: La Gonave (680 km²); La Tortue (180 km²); Ile à Vache (52 km²) and Ile Cayemite (45 km²). Approximately 63% of all lands have slopes greater than 20%, and only 29% have slopes of less than 10%. Less than 20% of the land under cultivation is appropriate for agriculture while most of the cultivated areas are very small parcels.

Once covered by forest, the country has been heavily logged and most arable land is being farmed beyond its carrying capacity. The total area under agricultural production (some 1,300,000 ha) is six times greater than the estimated areas suitable for agriculture resulting in significant deterioration of the land.

In 1996, the Government of Haiti ratified the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) and submitted a letter expressing its interest to be included into the least developed countries–Small Island developing States (LDC-SIDS) Initiative. Since then,

many attempts have been made to mitigate the process and the impacts of land degradation in the country at various levels. The government's commitment to fulfil its obligations under the UNCCD is consistent with the Haitian National Environmental Action Plan (NEAP) elaborated in 1999.

The main objectives of the third national report are:

- Evaluation of institutional and legal frameworks to carry out obligations under the UNCCD;
- Assessment of current strategies, policies and plans to combat desertification in Haiti;
- Analysis of progress and baseline actions undertaken to implement the UNCCD and in support to the preparation and implementation of the National Action Plan.

Institutional measures to implement the Convention

In the past years various governments have expressed growing concerns over the incidence of land degradation and the subsequent serious damage to the country's agricultural potential and capacity to ensure food security. The establishment of the Ministry of Environment (MoE) in the mid-1990s was an important step in the country's efforts to protect and manage a very fragile environment. The Government's efforts to combat desertification pre-date the UNCCD as evidenced by a range of policy initiatives facilitating action programmes across the spectrum of areas involved in environmental issues.

Recent measures include:

- ***The newly adopted Decree for Environmental Management*** published in the Official Newspaper "Le Moniteur" on January 26, 2006. The Decree provides framework and structural arrangements for sustainable land management including a Fund for the Rehabilitation of the Environment (*it is expected that this Fund may devote a section to combat desertification*) and the creation of new administrative frameworks such as the Inter-ministerial Council for land use planning and Environment (CIMATE) and the implementation of various technical units within concerned ministries. The new decree also proposes measures and provisions to put an end to the impunity of environmental 'free riders' abusing the country's natural resources, and to the ignorance of property rights.
- ***The Interim Cooperation Framework (ICF) in July 2004.*** Haiti's interim government presented international donors with a multidimensional development plan known as the Interim Cooperation Framework (ICF). Ten thematic groups were formed to assess current issues and priority needs of which Thematic 4 deals with protection and rehabilitation of the environment. The ICF recognizes that sustainability of economic recovery efforts is threatened by the advanced deterioration of the environment. The strategy is to actively promote the replacement of wood and charcoal, to fight the deterioration of land and natural resources.
- ***The Inter institutional Steering Committee (CIP)*** is a coordinating mechanism created with several ministries, non-governmental organizations (NGOs) and international agencies. The CIP serves as an important platform to coordinate sustainable land management interventions for UNCCD implementation and to support elaboration of the National Action Plan.

- ***The Observatory on Poverty and Social Exclusion*** under the Ministry of Planning with the publication of the Poverty Map confirming uneven repartition of poverty over the territory. More than 82% of the rural population falls below USD2 daily income.
- ***The National Observatory for Environment and Vulnerability*** initiated by the United Nations Development Programme (UNDP) aims at addressing information barriers related to the dissemination of adequate and timely information. Much of the information available on land use patterns is incomplete making it outdated or of little use as a baseline. Land information systems need to be further developed and used for the challenges of identifying sustainable land management systems, for planning and monitoring the sustainability of land uses.
- ***The Agreement*** between UNDP, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the Global Mechanism (GM), the German Agency for Technical Cooperation (GTZ).and Canadian International Development Agency (CIDA) isdesigned to lead the way to joint activities related to raising awareness, promoting local debates, strengthening the role of civil and also participating in co financing to combat desertification.
- ***The revival of the Mixed Commission Republic of Haiti and Dominican Republic*** is a binational governance mechanism for the management of shared natural resources created through an agreement between the two governments in 1996. The Mixed Commission is crucial for good relations between the two countries and for monitoring transboundary interventions.

Legal framework

There is a very significant number of written rules and norms dealing with land management issues. However, despite all efforts, the legal framework is outdated and needs to be revised. State agencies are unable to ensure enforcement of regulations and policies, especially in rural areas. Additionally, some rules and norms are confusing and contradictory, while others are mainly restrictive and do not offer any alternatives.

There is a need to revisit the legislative frameworks and create more appropriate ones, as well as to foster adequate enforcement of policies and legislation with a view to ensuring coherence with sustainable land management principles and requirements. The new Decree for Environmental Management and the newly elected Parliament are significant steps towards the implementation of legal provisions in line with the country's tremendous efforts to combat desertification and drought.

Synergy with other International Environmental Agreements (IEA)

Multiple efforts are underway to avoid duplication and to facilitate better coordination of interventions. Synergy is being developed to assess the impacts of land degradation process with other issues such as climate change, loss of biodiversity, depletion of the ozone layer and the use of persistent organic pollutants. Through the development of the National Capacity Self Assessment (NCSA) with the support of the GEF and the United Nations Environment Programme (UNEP), Haiti is currently evaluating mainstreaming needs and priorities to

strengthen national and local capacities to address global environmental problems in an orderly planned and coherent manner. The NCSA process aims at:

- Defining integrated strategies to ensure effective implementation of the IEA, especially the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the UNCCD and the Convention of Biodiversity (CBD);
- Contributing in the long run to the development of an holistic approach for capacity development at systemic, institutional and individual levels;
- Formulating an Action Plan and a mechanism framework for monitoring and evaluating gaps to satisfy needs and priorities.

The participatory process

The Ministry of Environment is responsible for the implementation, fulfilment of actions and commitments under the UNCCD. It has put forward several means to mobilize all the sectors of the population.

The third report's preparation relied heavily on the participation of major stakeholders; governments bodies, academic and scientific, private sector, civil society and NGOs. The consultative framework includes the following:

- ***Strengthening dialogue with international, regional and binational partners*** The international community recognizes that desertification can be a serious threat to Haiti's sustainable development. Haiti has signed and ratified various international agreements, conventions and protocols related to land management, including the UNFCCC and the convention on the protection of the ozone layer. With the CARICOM/CARIFORUM (Caribbean Community/Caribbean Forum), the Ministry of Agriculture and FAO have elaborated a National Mid-term Investment Plan for three major projects to combat desertification *a)* support to marine and continental fishing activities; *b)* funding of hydraulic interventions for agriculture; and *c)* management of natural resources in mountainous areas. At the binational level, Haiti and the Dominican Republic are working together to develop a coherent binational action plan and dialogue process for the border region, to establish national coordination mechanisms, and to mobilize multilateral donor support.
- ***Extensive consultations for interagency coordination*** There are increasing efforts being made by international development agencies and NGOs to address sustainable management of natural resources. A wide range of initiatives are being undertaken particularly in the border region. Since 1998, two important bilateral conferences were held resulting in high level dialogue and multilateral donor mobilization for selected on-the-ground investments. The CIP as a coordination mechanism is responsible to secure interagency cooperation and has conducted various interagency meetings.
- ***Realization of national, regional and local workshops, seminars and meetings*** Responsibilities for land management practices and related issues lie with a number of agencies, often without any coordination mechanism. There is growing effort to develop joint policies and activities for better implementation of the UNCCD. The government has also initiated ample participation of major stakeholders through national and regional workshops and seminars attended by scientific community, local government, farmers,

and local and community-based organizations. National campaigns have also been held for public awareness, education and dissemination of information.

Assessment of strategies, policies, plans and progress to combat desertification in Haiti;

Although a National Action Programme (NAP) to Combat Desertification has not been yet formulated, the Government has nonetheless, elaborated a set of policy documents that address desertification issues. These include the national water policy, population policy, sectoral policy of the Ministry of Agriculture for watershed management, disaster and hazards management national plan and an Interim Poverty Reduction Paper. Nonetheless, the absence of a formal institutional coordinating framework results in overlapping jurisdictions and occasionally, conflicting efforts.

There are serious concerns over alarming consequences of the land degradation process on the country's capacity for sustainable development. There is a general consensus on the need to have a strategy aimed to the prevention and mitigation of desertification and drought.

The principal problems underlying the desertification process and drought are:

- (i) *Conversion of forests*, recovering secondary forest, grasslands and shade coffee to other land uses. Using forest cover as an indicator of ecosystem stability, the country's forested areas have been reduced to about 1.4%, down from 60% eighty years ago.;
- (ii) *Inappropriate farming and grazing methods* on steep lands (burning, hillside tillage, and weeding);
- (iii) *Use of fuel wood as the primary source of energy* in rural settlements. For more than 70% of the population, the main source of energy is fuel wood/charcoal (yearly use between 4.5 and 6 million m³);
- (iv) *Unplanned settlement patterns*;
- (v) *Limited access of farmers to appropriate technologies* and insufficient awareness at all levels of sustainable land management processes;
- (vi) *High poverty* leading to a dependency on natural resource extraction and unsustainable activities for survival.

In response, the government has elaborated and reinforced various initiatives, including:

- Realization of income generating activities and access to primary socio-economic services;
- Access and management of water resources;
- Rehabilitation of degraded watersheds;
- Definition of linkages between risks, disaster management and local development;
- Development of educational, informational materials and finding alternatives to take information to the most far-off communities;
- Implementation of an early warning system using Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing tools;
- Execution of a National Information Territorial Programme for sustainable development (*Programme d'informations Territoriales pour le Développement Durable –PITD*) that will provide necessary tools for integrated approach to territorial management, risk and disaster prevention and management; and prospective analyses.

- Creation of a National Center for Geospatial Information (CNIGS)
- Strengthening of existing observatories including the National Observatory for Food Security, the Observatory for land properties and tenure systems (GREF), the Observatory for Agricultural Exchanges between Haiti and Dominican Republic (LAREHDO), and the Observatory for the Development of New Technology for Information and Communication in Haiti (OPTCIH).

Financial resources to tackle land degradation issues

One of the major constraints to the implementation of the UNCCD in Haiti is financial resources. Different institutions have an extensive range of programmes and projects that are not focused on fighting desertification, but indirectly do so when encouraging sustainable development of natural resources.

Some of the actions in fulfillment with UNCCD commitments are:

- The UNDP PAGE Programme to support environmental management, institutional strengthening and systematisation of environmental information;
- The Inter-American Development Bank (IDB) five-year project for institutional strengthening of the Ministry of Environment;
- The CIDA 7 year CAD\$10 million project to contribute to the rehabilitation of the Artibonite watershed;
- The GTZ 9 year phased project which started in 2004. The first phase for 3 years is worth 1.5 million euros;
- Two UNDP-GEF projects: Capacity Building for sustainable Land Management” under LDC-SIDS portfolio and the binational PBF-B initiative *Integrated Management of the Artibonite International Watershed* aiming at capacity development at the local level, promotion of sustainable land use models;
- The GEF/UNDP-Small Grants Programme (SGP) to promote small projects and capacity building for local development initiatives;

Conclusion and Recommendations

Institutional fragmentation characterizes for the most part the execution of land management in Haiti. The government is, however, trying to mainstream sustainable development principles into national policies and programmes in order to reduce existing threats to the environment and sustainable land management. Not having a NAP has subsequently provoked a lack of coordination and strategic vision.

In fact, the policy frame presents non-integrated, sectoral approach, in the fight to combat desertification. There is an ample legal frame that assures the preservation and sustainability of natural resources, but there is difficulty in its application, having duplicity of functions between institutions and a legal system that does not favor concrete and timely actions.

It is necessary to encourage synergy between conventions, through integration processes between programmes and projects to achieve greater impact in natural resource conservation and to make the most of the opportunities of each convention. In doing so, the NAP to Combat Desertification and Drought will consider:

- Development of monitoring and evaluation (M&E) systems for land use potential;
- Implementation of an appropriate management framework and capacities for integrated cross-sectoral approaches to foster sustainable land management
- Identification and clarification of links with new priorities and provide a framework for the integration of environmental considerations into the planning and decision-making process for social and economic development in the implementation of national strategies such as the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) and the fulfillment of the Millennium Development Goal (MDG)
- Definition a national strategy for concerted actions for effective implementation of the UNCCD;
- Integration of gender considerations into all national, regional and local plans and programmes to improve the economic well being, preserve natural resources and follow-up and assessment of desertification and drought effects;
- Elaboration of an investment plan and identification and mobilization of all potential sources of funding.

HONDURAS

The main advance in the application of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is the elaboration of the National Action Programme (NAP) for the fight against desertification and drought in the country. Encountering a high participation by the communities affected by natural resources degradation processes (water, land and forests), nevertheless, there have been few advances in Honduras related to the actions that must be done for its implementation. Honduras has many national plans, strategies and programmes focused on reaching sustainable development in the country, that indirectly contribute to combat desertification and drought, since their strategic axes, specific objectives and policies were the base for pointing the objectives and activities of the NAP. However, it is necessary to integrate the NAP into these plans and strategies so it becomes a practical instrument of application within the Strategy for Poverty Reduction (ERP) for issues of fight against desertification and drought. The most important plans, strategies, and programmes include the ERP, the food security and rural space policy, and the environmental and forestry policies. This report analyzes how these different policies and programmes are related to the strategic axes of the NAP.

In terms of coordination between the National Coordination Body and the Ministries in charge of development policies in the country, there is still much to do. For this purpose, the NAP proposes the creation of the National Committee to Combat Desertification and Drought (CONDES), composed by 12 institutions, among which are foremost the Ministries of agriculture and livestock, natural resources and environment, the presidency of the republic and public education. Once the CONDES is legally created, it is expected that the coordination should become better.

Regarding institutional measures adopted in order to apply the Convention, the advances have been limited to establish levels of coordination for the elaboration and implementation of the NAP. Still, Honduras needs to make a greater effort in order to reveal the integration in the national development policies, by means of rationalization and modification of the related laws if necessary. The NAP does not include links with regional and sub regional mechanisms to combat desertification; yet, Honduras is coordinating in agreement with Nicaragua and El

Salvador, dealings to develop the Gulf de Fonseca's basin management project and present it to the Global Environment Facility (GEF).

The most important institutional progress is centered in the land ownership *and distribution*, as the Land Institute and the Executive Committee of Land Management were recently created.

In order to initiate a participatory approach to combat desertification, an Interinstitutional Technical Group (ITG), was formed composed by the Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), SAG, Contencioso Administrativo en contra de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFECOHDDEFOR) Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social (CONADES), UNAT, the Network of International Non-Governmental Organizations (RIOD) and the German Agency for Technical Cooperation (GTZ). This group assumed leadership to elaborate the NAP. On the other hand, given that at this time there are no concrete actions for implementing the NAP, the dynamic of participation has decreased, so that it has become urgent to begin measures that will motivate participation in the institutional level. The government did a series of maneuvers before the international cooperation, with the intention of obtaining their support for the elaboration and implementation of the NAP, The most significant support from came GTZ, which continues supporting the implementation of the NAP, and especially those aspects related to mobilization of funds, development of indicators and financing small local actions.

With respect to the mobilization of funds the NAP proposes a strategy that it is expected to be included in the assignment of financial national resources, having as its main strategy the introduction of the plan within the dominion of the ERP and taking steps before international financial mechanisms such as GEF. Considering the problems that Honduras faces in the terms of using its Natural Resources, the NAP proposes a series of measures to improve their usage and fight against the desertification in Honduras. In addition to this, it will be necessary to coordinate the actions of the projects being implemented in Honduras and identify the possibility of their participation in the development of capacities for the NAP. The NAP presents the financial necessities for its implementation and proposes a strategy to obtain those resources in a sustainable manner. This strategy includes a series of orientations and actions emphasizing the search of funds on a local, national and international level.

Regarding technical assistance, Honduras has not taken advantage of the availability for this kind of support in the developed parts of the Convention; in that sense it is needed to define the topics and the priorities of the technical assistance in accordance with the focal points of the other conventions, before soliciting it. The NAP contemplates the structuring of a NAP information system (SINPAN) that will permit continued measurement of the effectiveness of the planned interventions. Currently Honduras demonstrates lack in the integration and coordination of the different monitoring and evaluation systems, and requires a system of indicators that would allow it to measure and analyze the behavior or tendencies of desertification and drought. It is necessary to push forward scientific and technical activities through the establishment of an agenda for the development of scientific and technical knowledge in the country. To that end, the NAP proposes a series of scientific and technical activities related to the fight against desertification and the diminishing of the effects of drought in the country, especially, will promote investigations into the areas of forest, soil and water management, and will take advantage of the obtained experiences by the development projects.

MEXICO

1. STRATEGIES AND PRIORITIES ESTABLISHED WITHIN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PLANS AND/OR POLICIES

Development planning in Mexico is done in six-year administrative periods, being the National Development Plan (PND) 2000-2006 currently in force and the sectorial programs or strategies derived thereof that contemplate policy lines, strategies and actions oriented at stopping the degradation of terrestrial ecosystems, promoting the restoration of degraded ecosystems and incorporating consciousness and cultural elements, as well as technologies and production systems that use our natural resources in a sustainable manner and conserve the ecosystems.

Among the principal advances that have been accomplished so far should be mentioned the work that has been done to implement the dispositions of the Sustainable Rural Development Law (LDRS, 2001) on planning and coordinating policies for rural development, in order to link different sectorial policies through the Special Concurrent Program for a Sustainable Rural Development (PEC).

Regarding the mitigation of the adverse impacts due to drought, several important advances are included in this report, based on different programs of the Federal Government; however, many times, this is not perceived as one of the aspects to combat desertification.

2. INSTITUTIONAL MEASURES TAKEN TO IMPLEMENT THE CONVENTION, INCLUDING LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL FRAMEWORKS OR ARRANGEMENTS, LINKAGES AND SYNERGY WITH OTHER ENVIRONMENTAL CONVENTIONS AND, AS APPROPRIATE, WITH NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES

With regard to the Regional Action Program (RAP), although Mexico is currently not developing any activities within the RAP, it does perform activities related to the thematic programs (TPN), such as soil erosion and degradation studies, as well as an updated cartography of land use and vegetation, the population and housing census in 2005, which produce indicators of land, migration, poverty, comprehensive management and efficiency of water resources, through regional hydraulic plans, forest hydrological restoration plans and, proceedings of the Basin Councils; as well as the promotion of sustainable renewable energies, mainly through the Renewable Energy Project for Agriculture carried out by the National Program of Micro-Basins (FIRCO) and the Comprehensive Energy System Program in Rural Areas (Department of Energy).

Regarding the National Coordination Body (NCB), it is important to highlight the creation in May of 2002 of the National System to Combat Desertification and Degradation of Natural Resources (SINADES), by the Inter-Ministerial Commission for Sustainable Rural Development, in accordance with the LDRS. This system was formally established in 2005; it is presided by the Ministry of Environment and Natural Resources (SEMARNAT) and acts as the NCB in Mexico. The SINADES is constituted by representatives of public federal agencies, state governments, organizations of rural farmers, non-governmental organizations and the academic sector. This multi-sectorial constitution gives it the capacity to promote the implementation and evaluation of the National Action Program to Combat Desertification (NAP).

The institutional framework to combat desertification and mitigation of drought has been significantly widened; however, it has been disintegrated into different governmental authorities, such as National Water Commission (CNA), National Forestry Commission (CONAFOR), National Commission of Protected Natural Areas (CONANP), National Dry Zone Commission (CONAZA), FIRCO, National Institute of Statistics, Geography and Computing (INEGI), Department of Agriculture, Cattle, Rural Development, Fishing and Nutrition (SAGARPA), Department of Social Development (SEDESOL), SENER, SEMARNAT, Mexican Network of Efforts against the Desertification and Degradation of Natural Resources (RIOD-MEX), state and municipal governments.

The main achievements in the legal environmental framework regarding combating soil degradation, are centered in the update of the forest legislation. The General Sustainable Rural Development Law (LGDFS), published in 2003, and its regulations of 2005, incorporate concepts and mandates about the fight against soil degradation and desertification, and supports the creation of specific programs to combat desertification, highlighting the National Program for the Protection, Restoration and Conservation of Forest Soils. The implementation of the LDRS and its regulations of 2005, with regard to the fight against desertification, has evolved in the creation and operation of SINADES, as coordinating structure of the public, social and private sectors, to support the implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification in countries affected by Severe Drought or Desertification, particularly in Africa (CNULD).

3. PARTICIPATORY PROCESS IN SUPPORT OF PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF ACTION PROGRAMS PARTICULARLY PROCESSES INVOLVING CIVIL SOCIETY, NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND COMMUNITY-BASED ORGANIZATIONS.

During the last years, effective mechanisms of social participation have been created and consolidated on different levels, giving room for the population to be actively involved in the design, execution, follow-up, evaluation and diffusion of public policies. These mechanisms are diverse and cover a broad range of informative, consultative and decision mechanisms. Generally speaking, the most widely used mechanisms of social participation are mainly focused on the operation of consultative councils and public consultations, even though there are other mechanisms such as the Citizen's Claim and the Right to Information, established through the Federal Freedom of Information Act, issued in 2004.

The mechanisms of social participation that are promoted by the Federal Government base their legal foundation on different laws, and it is precisely these codes that establish the criteria for the constitution of the Councils, always trying to find an equitable representation of the different participants that interact in specific sectors. Given the incipient creation in 2005 of SINADES, it has barely started with a process of institutional, academic and non-governmental representation; however, its constitution does not include specific criteria for a balanced representation of men and women.

There is an important link, which still needs to be strengthened, between educational institutions and governmental areas for environmental education. One particular example for this is the Sustainable Development Studies and Training Center (CECADESU). In the case of traditional knowledge, there are mechanisms in place to safeguard and apply this knowledge such as the Service for Rural National Training and Technical Support (SENACATRI) located in

SAGARPA and the National Commission for the Development of Indigenous People. The Federal Government promotes the use of the Internet in regions with greater marginalization through 7,200 digital community centers of the e-Mexico project.

4. CONSULTATIVE PROCESS IN SUPPORT OF THE PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF NATIONAL ACTION PROGRAMS AND PARTNERSHIPS AGREEMENTS WITH DEVELOPED COUNTRIES PARTIES AND OTHER INTERESTED ENTITIES, PARTICULARLY MOBILIZATION AND COORDINATION OF BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL RESOURCES

With regard to international cooperation, Mexico has received the support of different international entities for the implementation of several actions that affect the fight against land degradation. This support is mainly of a technical and financial nature. Currently, there are several projects being implemented in Mexico that, though not directly derived from the NAP, with a significant contribution to accomplish the objectives of the Convention in the country. The resources obtained through these projects add 546.6 million dollars.

5. MEASURES TAKEN OR PLANNED WITHIN THE FRAMEWORK OF NATIONAL ACTION PROGRAMS, INCLUDING MEASURES TO IMPROVE THE ECONOMIC ENVIRONMENT, TO CONSERVE NATURAL RESOURCES AND PROMOTE THEIR SUSTAINABLE USE, TO REHABILITATE DEGRADED LAND, TO ENHANCE KNOWLEDGE ON DESERTIFICATION AND ITS CONTROL AND MONITOR, AND TO MONITOR AND ASSESS DESERTIFICATION AND DROUGHT

There are diverse and important achievements to combat desertification in Mexico, *inter alia*, in terms of revision of the legal framework, implementation of assessment studies and cartography of the degradation of natural resources, institutional development and the establishment of specific programs. The most complete diagnosis carried out with regard to the implementation of the Convention is the National Capacity Self-Assessment for the conventions of biodiversity, climate change and desertification, allowing the identification of areas of opportunity in order to create capacities and, due to its participatory nature, opening the opportunity to obtain and analyse institutional, social and academic experiences. Among the main conclusions of the AECN project, it is the necessity to update the NAP and the importance to search for a better intersectorial coordination for its implementation.

The Mexican Government has established a range of support programs that impacts the fight against desertification and degradation of natural resources, and that are within the PEC. This range of programs considers subjects such as: productive restructuring, land and water conservation, improve irrigation efficiency, forestation and reforestation, conservation and sustainable use of natural resources, protected natural areas, management of micro basins, environmental services, control and monitoring of compliance with environmental laws, improve pasturelands, attention to climatic contingencies, among others. These programs also include training and technical support components, organizational strengthening, research and technology transfer.

The following are the main actions performed in accordance with the priority areas described by the Convention;

Action Programs for the Conservation of Natural Resources. SEMARNAT and its sectorial organs operate a series of programs focused on the conservation and sustainable utilization. The adopted strategy to face these challenges includes measures focused on conservation (such as the creation of protected natural areas), sustainable management of resources (such as forest management or use of wildlife), recovery of species and ecosystems (through specific programs for key species or through reforestation), decrease of important pressures that have a negative effect (such as illegal logging) and support measures for users to encourage the best use and conservation of natural resources, through strengthening the programs for a comprehensive management of hydrographic basins, inspection and monitoring, conservation and sustainable utilization of water resources, by rehabilitating and modernizing the operational infrastructure and by modernizing the modernization irrigation on plot level.

Renewable Energies. The use of renewable energy sources has been promoted aggressively. The large hydroelectric plants and geothermics are the two most explored renewable sources of energy. Both constitute 25.4% of the installed capacity of the National Electric System and contribute 15.1% of the national generation. By the end of 2005, the Energy Regulatory Commission (CRE) had authorized 54 electric energy generation permits based on renewable sources, 37 of which are currently operating.

Ecological Spatial Planning. In 2004, 40 local planning were registered, of which 10 were in the process of elaboration, only 14 had a decree and the remaining 16 were technically considered as being concluded. With regard to regional planning, in 2004 there were a total of 82, of which only 19 had a decree, 24 were in the process of elaboration and 39 were technically considered as being concluded. Of the total, 45 are sub-state planning, 23 state planning and 14 supra-state planning. Emphasis has been given to the participatory ecological community planning, especially in entities such as Oaxaca and Durango and Michoacan. Though more than half of the territory has an ecological state planning that is technically concluded, only eight states have a decreed ecological state planning that covers the entire surface.

Comprehensive Management Plans of Hydrographic Basins. Currently about 70 initiatives are being implemented for a comprehensive management of hydrographic basins in Mexico, considering 64 of the National Program of Micro-Basins of FIRCO.

Conservation of Mountain Ecosystems. Sixty priority mountains have been identified and 34 of the 60 mountains mentioned before have been attended through Operational Management Programs (POG) of the Sustainable Management of Mountain Ecosystems. The National Mountain Committee chaired by the National Forestry Commission (CONAFOR), in which 45 institutions participate, including 12 State Departments, 14 non-governmental organizations (NGOs), 5 Forestal Business Chambers, 6 Farmers Associations and one International Organization (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)), has worked between 2003 and 2005 POG for 34 of the 60 priority mountains, which include 38 mountains.

Assessment of Forest Resources. The current map of land use and vegetation, Series II, elaborated by the INEGI, which describes the status of plant coverage of the country in the year 2002, points out the 72.58% of the country is still covered by natural communities in different degrees of conservation; the rest has been converted into land for agricultural, farming, urban use or other anthropic covers. Of the surface that still conserves natural vegetation, wetlands constitute the predominant formation by representing 26.2% of the total; of these, at least 8% are

secondary. Together, forests and rain forests make up 33.8% of the national territory, each occupying a similar extension. The deforestation between 1990 and 2000 was of 401,000 hectares (990,000 acres), with a deceleration in the tendency that allowed estimating an annual average reduction of 314 thousand hectares (776 thousand acres) in the period 2000–2005, with the prediction of reducing to 234,000 deforested hectares (578,000 acres) by the end of the same year.

Use and Sustainable Planning of Rangelands. Until a few years ago, the Federal Government has launched direct actions to improve the management of pasturelands, among which should be mentioned the Pastureland Recovery Program; the Cattle Productivity Incentives Program (PROGAN) of SAGARPA, which attempts to increase the sustainable availability of forage per unit of pastureland surface through the improvement of plant coverage, as well as the modernization of the productive infrastructure for a better management of the land and in order to increase production and productivity. Nevertheless, there is still a lack of local codes and regulations regarding planning and sustainable utilization of pasturelands, from state and municipal governments to community level.

Reforestation Programs. The National Reforestation Program (PRONARE) has worked on the reforestation and revegetation of deforested areas and of degraded ecosystems, on 1,195,296 hectares (2,953,640 acres) between the years 2000 and 2005, with an annual average of almost 200,000 hectares (494,000 acres). Though the reforestation survival rates have improved in recent years, they still represent a challenge for a complete recovery of reforested areas.

Intensification of Soil Conservation Programs. SAGARPA and SEMARNAT, through different strategies, have joined efforts in their operating agencies for soil conservation and restoration. The principal conservation, rehabilitation and improvement programs for degraded soils, collection of rain water and mitigation of drought effects, for the period of 2001 to 2005, have worked on a surface area of 6.8 million of hectares (16,338,232 acres) and are the following: Protection, Restoration and Conservation of Forest Soils (CONAFOR), PIASRE, Support Fund for Rural Populations Affected by Climatological Contingencies - National Fund for Natural Disasters (FAPRACC-FONDEN), National Reforestation Program (CONAFOR), Alianza Contigo, Restoration of Non-Forest Soils, Temporary Work Program (PET SEMARNAT), FIRCO, Procampo Ecológico - Support and Services for Agricultural Commercialization (ASERCA), Land Conservation in Protected Natural Areas - ANP (CONANP) and PEC of the Federal District (DF).

Establishment of Programs to Forecast and Mitigate the Effects of Drought. Despite the advances in the subject, no drought warning system has been developed to date, though there are several elements of attention, in terms of forecast, communication and mitigation. On the subject of weather forecast, the National Weather System (SMN) has a wide-ranging observation infrastructure, historical databases and resources; the North American Drought Monitor, NADM, began operations in April of 2002. In terms of attending contingencies, the actions of FONDEN stand out, which only considers the drought in terms of how it affects the capacity of water production at the sources and the supply of the population, offering support for the restitution of this capacity. The FAPRACC, which considers the drought as atypical and unpredictable, attends the negative effects that were caused and focuses on the inducement of farmers to participate in a culture of conservation.

On the other hand, regarding the subject of action programs to improve institutional organization, the current administration of the Federal Government established a *Good Government Agenda*, focusing on improving the institutional organization and the services rendered to the citizens in different areas, of which different programs have emanated, such as the professionalization of public servants, information access; combating corruption, quality, digital and transparent government and regulatory improvement, all of these implemented as measures in the entire Federal Public Administration in order to improve the institutional organization of the federal agencies, including those that carry out measures with regard to the fight against soil desertification.

However, the principal advances of institutional organization that support the efforts to combat desertification are the constitution of the Inter-Ministerial Commission for Sustainable Rural Development (CIDRS), the SINADES and the structuring of the PEC, in order to deal in a comprehensive way with the problems of susceptible areas or with those that are affected by degradation of natural resources.

Regarding action programs to widen the knowledge and fight against desertification, within CONAZA, the PIASRE carries out Comprehensive Development projects to promote the appropriate use and management of natural resources, construction work and soil and water conservation practices and basic rural infrastructure; as well as productive restructuring towards more profitable crops, appropriate to the productive potential and less vulnerable to adverse Climatological phenomena, the National Program for the Protection, Restoration and Conservation of Soils of CONAFOR has been carried out mainly in communal forest areas and communities, where young and adult men and women participate, who have understood the helpfulness of this type of projects and practices to conserve their soils so that they adapt to natural, social and economic conditions. The National Program of Micro-Basins of FIRCO, carries out the Conservation and Restoration Guiding Plans (PRPC) of the marginalized areas and those with zones in danger of desertification.

The most important efforts carried out to date for monitoring and determining the desertification and drought effects are mentioned below:

Support Fund for Rural Populations Affected by Climatological Contingencies. It was created in compliance with the dispositions of the LDRS and the Decree for the Budget of Federal Expenditures 2003. During 2004, the number of hectares attended by this program has increased 82% compared to 2003 and 63% in the first five months of 2005, compared to 2004. Similarly, the number of beneficiaries has also increased in terms of the attended surface, reflecting an acceptance and important growth during the three years it has been in operation. In 2004 climatological contingencies were attended in 16 states, and in the first five months of 2005, contingencies were attended in 15 states. The total number of farmers that benefited during the year 2004 and in the first five months of 2005 was 173,100 and 107,991, respectively.

International Center for Demonstration and Training of Rain Water Use (CIDECALLI). Its creation in 2002, in the Postgraduate College (COLPOS), has promoted the quantity and quality supply of rain water for human consumption on family level and community level through training and several projects, giving special attention to marginalized populations. The different cistern prototypes of CIDECALLI constitute solutions to the problems of quantity and quality supply of water for human consumption, animal consumption, greenhouse plant irrigation and auxiliary irrigation during seasonal farming.

While acknowledging that the PEC is on its way to improve the economic situation of the rural populations and being executed by the Federal Government through several State Departments and in coordination with the state and municipal governments, the following sub-programs exist: Opportunities, Local Development Program (Micro-Region Strategy), Productive options, PET, Plan Acuario, Support Fund for Productive Projects, the Program for Women in the Agricultural Sector, Land and Young Rural Entrepreneur Support Fund, Commercial Forest Plantation Program (PRODEPLAN) and Forest Development Program (PRODEFOR), Hydrological Environmental Service Program (PSAH) and Program for Ordering and Strengthening Forest Self-Management (PROFAS).

One of the principal measures to accomplish the advancement of federalism and the development of local capacities is the creation of the National Institute of Federalism and Municipal Development (INAFED). In terms of decentralization and supporting local capacities linked to actions that affect the fight against soil desertification and degradation, two State Ministries have a stronger connection to this subject, SEMARNAT and SAGARPA. The city governments that are incorporated in the municipal program of rural development must have a Municipal Development Council, a Municipal Development Plan designed and implemented, and an office of rural development or equivalent. With the creation of SINADES the bases are established for putting into practice state, municipal and district rural development committees with regard to the fight against desertification and drought.

Though several programs include the strengthening of the local capacities of non-governmental actors as a component of support, there are programs that stand out due to their clear orientation towards the development of local organizations, such as the Program for Capacity Development in Rural Areas (PRODESCA - SAGARPA), the Professor (SAGARPA), the Social Joint Investment Program (SEDESOL), PROFAS (CONAFOR), the Micro-Region Strategy, the National Program of Micro-Basins and the Sustainable Regional Development Programs (PRODERS -CONANP).

6. FINANCIAL ALLOCATION FROM NATIONAL BUDGETS IN SUPPORT OF IMPLEMENTATION AS WELL AS FINANCIAL ASSISTANCE AND TECHNICAL COOPERATION, INCLUDING THEIR INFLOWS. PROCESSES TO IDENTIFY THEIR REQUIREMENTS, AREAS OF FUNDING AND SETTING PRIORITIES

The total amount of available resources in the Federal Government from the PEC 2005 are 147,000 million pesos, dispersed in 304 programs, of which around 60,000 million pesos are dedicated to different aspects related to production. From this amount, 2,000 million pesos correspond to programs of rural development.

With the establishment of PEC, it is possible to have an approximate amount for the allocation of resources on behalf of the Federal Government directed at areas of rural development, which, in 2006 add up to approximately 150,000 million pesos, including measures for education, health, communications, promotion of primary production and commercialization, social development, research, training and technology transfer, new productive options and the conservation of natural resources.

Regarding the development of technical cooperation, it should be mentioned that there are several programs designed to combat desertification. Every institution develops alliances for a technical cooperation with the others, in accordance with their specific objectives; however,

almost all of the efforts are complementary and semi-concurrent. The program that has best worked in the strengthening of alliances for technical cooperation has been the National Program of Micro-Basins of FIRCO, which works at the high parts of the basins with support from the municipals that are interested in conserving their natural resources. Among the most important actions to be multiplied and strengthened is the National Program for the Protection, Restoration and Conservation of Forest Soils, PIASRE, PROGAN and FAPRACC.

7. REVIEW OF BENCHMARKS AND INDICATORS UTILIZED TO MEASURE PROGRESS AND AN ASSESSMENT THEREOF

Among the most important initiatives for monitoring and evaluating advances, the following stand out:

Creation or Strengthening of the National Capacity for Environmental Surveillance and Observation.

Specifically, the capacity of surveillance in the environmental sector is reflected by the design and operation of the National Environmental and National Resource Information System (SNIARN), which is connected to another important link in the generation, and diffusion of information for rural areas, the National Information System for Sustainable Rural Development (SNIDRUS), established in 2003. The capacity of surveillance and observation not only of the environment, but also of many other aspects, has been strengthened by the operation of the Satellite Reception Station EERMXS (November 2003) with complete integration of SPOT constellation (Earth Observation System), since the Mexican Government obtained a multi-license, which permits optimizing this service coordinated by the Department of the Navy and SAGARPA, in order to support federal and state agencies, as well as the research and academic sector.

National Information Systems on Desertification. The SNIARN integrates information regarding the inventories of natural resources, the monitoring of air, water and soil quality, the ecological code of the territory and logs, programs and actions designed to support the conservation of the ecological balance and environmental protection. Among the actions integrated by SNIARN that have recently been carried out regarding the monitoring of desertification, recent evaluations of soil erosion and degradation stand out, the updating of the National Forest and Soil Inventory, the cartography of land use and vegetation Series II, Climatological Scenes of the Mexican Republic in view of the Climate Change, Preventive Strategies for Adverse Agricultural Contingencies, the Permanent Drought Monitoring carried out by the Drought Research Center (CEISS), Vulnerability Studies for conditions of drought or climate change, the desertification of the territory and the potential modification of the ecological regionalization; studies of basin and wetland management and ANP.

Access of the Principal Agents to Available Information. The public has access to all the information on natural resources and the status of the environment and desertification, produced by governmental agencies. Efforts have been made to facilitate user access to information, by distributing it on printed and magnetic media and through the Internet, using public agencies web pages.

Consultative Mechanisms for the Analysis of Results and Periodic Reporting. There is no NAP impact evaluation system in place to date, but there is one regarding the specific

governmental programs that contribute to combat desertification. There are several consultative instances and social participation such as the National and Regional Councils for Sustainable Development, the National Forest Council, the Mexican Council for Sustainable Rural Development and others, where the results from specific programs are presented, linked to combat desertification.

Regarding the advances in the creation of appropriate technologies for a sustainable land management, the production and utilization of natural resources, remain largely with public institutions of research and higher education than with the private sector. The participation of research and academic institutions tries to establish a link between the technology needs and the tasks of investigators, while spreading the technological advances that were accomplished.

Finally, the National Capacity Self-Assessment project, mentioned before, constitutes an important support in order to strengthen the integration process of environmental criteria in public policies of all sectors. As such, it contributes to the updating and strengthening of the National Action Plan to Combat Soil Degradation and Desertification.

NICARAGUA

Nicaragua adoptó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), el 21 de Noviembre del 1994 y la misma fue ratificada en Octubre de 1997 por la Honorable Asamblea Nacional mediante el decreto No. 1795. Estos dos eventos definen el marco jurídico para que el país asuma la responsabilidad de implementar la UNCCD en los territorios afectados por fuerte degradación de la tierra y propensos a la sequía. De igual manera, tomando en consideración el Arto.26 de la UNCCD y las decisiones de la conferencia de las partes (COP), en especial la decisión 11/COP.1., la cual orienta la presentación de informes nacionales ante la Secretaria de UNCCD; basado en este mandato, Nicaragua elabora el presente informe que describe los progresos de la implementación de la misma en el país..

En este contexto, el Gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), asumiendo este compromiso, ha desarrollado acciones orientadas al manejo de la problemática de los territorios mencionados. Uno de los primeros pasos fue la realización de un estudio país con el objetivo de conocer el estado de las condiciones ambientales y sociales en la zona. El estudio identificó técnicamente las zonas secas del país y sus condiciones naturales y de desarrollo.

Una vez concluido el estudio, como documento técnico proporcionó una base de datos importantes, los cuales sirvieron de insumos básicos para la elaboración del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la sequía (PAN), dando cumplimiento de este modo a uno de los compromisos iniciales mas relevantes del Convenio.

A partir de entonces, Nicaragua ha venido enfocando sus esfuerzos de trabajo en los temas políticos, legal e institucional que le permitan implementar de manera efectiva el PAN. En este contexto, el PAN ha logrado una armonización consecuente con otras políticas del gobierno, entre estas, una de las más relevantes, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que define la ruta de crecimiento socioeconómico y que además el país ha consensuado con distintos sectores, concluyendo que es una vía apropiada para el logro de resultados satisfactorios en el combate a la pobreza y en materia ambiental. Sin embargo es importante mencionar que, el PND tuvo como

soporte otras acciones estratégicas que le brindaron insumos significativos tales como las siguientes políticas: Política Ambiental Nacional, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional Forestal. En el plano internacional se destaca el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y El Convenio para la Diversidad Biológica que sin duda han servido como referencia de apoyo al referido plan de desarrollo

En otro contexto, es importante mencionar que el país ha llevado a cabo esfuerzos para la consolidación del marco jurídico existente con la promulgación de nuevas leyes que tienen relación con el tema de desertificación. Entre las leyes más relevantes se pueden mencionar: el Decreto para la definición de normas, pautas y criterios para el ordenamiento territorial, leyes de promoción al sub-sector hidroeléctrico y la generación de energía con fuentes renovables (esta ley se corresponde con los acuerdos de Bonn), ley creadora del Sistema Nacional para la prevención, mitigación y atención a desastres, ley forestal y ley de participación ciudadana aprobada recientemente. Cabe indicar que además de las leyes mencionadas, se encuentran en un estado avanzado para su aprobación la ley nacional de aguas y la ley de ordenamiento territorial.

Con relación al plano institucional, hay que subrayar de manera significativa el trabajo que desarrollan diferentes instituciones gubernamentales en las zonas secas del país, las cuales impulsan acciones de forma integral con un enfoque relacionado con el tema de desertificación, entre estas instituciones se destacan, el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), el Instituto Nacional Forestal, el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM) incluyendo al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) como ente coordinador e incentivador de una visión sinérgica para abordar el fenómeno de la desertificación.

A nivel subregional, en el plano centroamericano, Nicaragua ha venido trabajando de manera coordinada con la Comisión Centroamérica de Ambiente y Desarrollo (CCAD), en la cual se conformo a partir del 2001 un Comité Técnico de Desertificación (CTD) en el que están representados los siete países del área, este comité funciona como un órgano asesor y de comunicación entre la CCAD y los puntos focales de la convención en cada país. Es importante mencionar que el comité ha contribuido en la canalización de esfuerzos que los países estimulados por la Secretaria Ejecutiva de UNCCD han desarrollado como parte de la implementación de la UNCCD y la elaboración de los Programas de Acción Nacional de los países centroamericanos, como resultados de la conformación de un comité de la naturaleza mencionado ha servido además como el enlace con las iniciativas del Programa de Acción Regional para América Latina y el Caribe (PAR-ALC) y esfuerzos para impulsar los Programas Temáticos Regionales (TPN). Otro resultado importante de mencionar lo constituye el esfuerzo de Nicaragua, Honduras y el Salvador, en la formulación del Proyecto Manejo Sostenible de la Tierra en las Cuencas que drenan sus aguas al Golfo de Fonseca, el cual ha sido aprobado por el Fondo Mundial del Ambiente (FMAM) para desarrollar la fase preparatoria intermedia de un proyecto a largo plazo (PDF B).

Con relación a la implementación de la convención en el país, Nicaragua ha capitalizado toda la experiencia y esfuerzos nacionales y regionales, siendo el resultado relevante la formulación y gestión para la financiación del primer proyecto que se denomina Manejo Sostenible de la Tierra (MST), el cual fue aprobado por el FMAM. Se considera que el proyecto constituya un modelo de formulación y gestión que servirá como experiencia para que de manera concreta se visualice como el vehículo de implementación de la UNCCD. Es importante destacar que el proyecto inicio sus acciones en la zona seca occidental del país basado en criterios de prioridad,

enfaticando que la decisión de ubicar el proyecto en esta zona no indica que la zona seca restante no vaya a ser objeto de atención.

Es importante reconocer que el MST constituye un reto para Nicaragua en el sentido de que concretiza la implementación de la UNCCD de manera operativa y valida los lineamientos estratégicos definidos en el PAN.

El Gobierno a través MARENA y en el marco del MST, en el 2006 da inicio a un trabajo conjunto con los gobiernos municipales en la zona en donde se implementa la UNCCD con el objetivo de establecer sinergia y fortalecer sus capacidades para abordar la problemática provocada por los efectos climáticos adversos. Asimismo la facilitación de coordinación de acciones con la sociedad civil de sus territorios. Todos estos esfuerzos darán como resultado importantes lecciones aprendidas y experiencias positivas, las cuales servirán como base al Gobierno de Nicaragua para impulsar su replicabilidad en el resto de los territorios afectados por la degradación de la tierra y afectados por la sequía.

Haciendo una referencia histórica, es importante mencionar que el PAN fue elaborado en Marzo de 2003 teniendo como fundamentos estratégicos de referencia a la Política Ambiental de Nicaragua, la actualización del Plan Ambiental (PAN), los Convenios de Cambio Climático y Diversidad Biológica, la Estrategia de Biodiversidad, la Estrategia para el Manejo de la sequía y la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP), que sirvió de base para formular el Plan Nacional de Desarrollo. El hecho de hacer énfasis en estos aspectos, tiene como objetivo subrayar que el PAN desde el punto de vista estratégico tiene una vigencia de largo plazo, en resumen, es un documento orientador que se acopla de forma técnica y política con el marco estratégico institucional del país.

PANAMA

La Republica de Panamá, acoge La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Sequía y la Desertification, mediante la Ley No. 9 del 3 de Enero de 1996 y Deposito de Ratificación el 4 de Abril de 1996. El organismo de enlace y coordinación nacional y punto focal ante la convención es la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). El presente documento consiste en el Tercer Informe Nacional de avance sobre la aplicación de la Convención para ser revisado durante la quinta reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 5).

Funcionario de Enlace:	Dra. Ligia Castro de Doens
Dirección Postal y electrónica:	l.castro@anam.gob.pa Ciudad de Panama- Albroom Edificio 804.
Apartado Postal:	Apartado 0843-00793 C- Panamá, Panamá.
Sitios Web relacionados con desertificación:	www.anam.gob.pa :

La Republica de Panamá se complace en resaltar en este Tercer Informe Nacional, el cumplimiento del compromiso adquirido con la Convención, a través de un Programa de Acción Nacional (PAN) elaborado, validado y aprobado como documento de país mediante la Resolución ANAM AG- 0648-2004; y convirtiéndose este en una herramienta de trabajo, consulta, análisis y aplicación por parte de todas las instituciones del Estado panameño.

El proceso de implementación del PAN se inicia con la conformación de un organismo nacional de acompañamiento, el Comité Nacional de Lucha contra la Sequía y la Desertificación (CONALSED), creado por Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente AG - 0098 del 26 de marzo de 2004, conformado por instituciones del Estado, academias y organizaciones no gubernamentales. El CONALSED tiene como función principal velar por el cumplimiento de los Artículos 1 al 7 del Anexo III de la Convención. A continuación se muestra un cuadro que detalla las instituciones y representantes que componen el CONALSED.

Cuadro N° 1: Miembros del Organismo de Consulta Nacional

CONALSED . Institución /Persona	Gubernamental	ONG	Sexo Representantes Hombre/Mujer
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Representante: Carlos Chang	X		H
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Representante: Carlos Cordoba	X		H
Ministerio de Salud (MINSA). Representante: Atala Milord	X		M
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) Representante: Darysbeth Martinez	X		M
Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP). Representante: Manuel Rojas	X		H
Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SENACYT) Representante: Luz Graciela Cruz	X		M
Universidad de Panamá (UP). Representante: Ramon Erham	X		H
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá (CINAP). Representante: Juan De Dios Cedeno		X	H
Círculo de Estudios Científicos Aplicados (CECA). Representante: Rene Changmarm		X	H
Fundación para el Desarrollo Integral de Cerro Punta (FUNDICEEP) Representante: Jorge Pitty		X	H

Motivados por la importante tarea que se tiene por delante, las organizaciones no gubernamentales se van organizando por áreas críticas. Así mismo se destaca la acreditación ante la Convención y el ingreso a la Red Internacional de ONG's de Desertificación (RIOD), de una de ellas - el Círculo de Estudios Científicos Aplicados (CECA)- quien además actúa como representante regional de Centroamérica ante RIOD y coordina las actividades nacionales.

A partir de la promulgación del PAN se ha promovido el abordaje conceptual de normativas relativas a suelo, agua, biodiversidad etc; aplicables a nivel nacional y con énfasis en áreas críticas, las cuales se encuentran en la actualidad en procesos de análisis y discusión. Cabe mencionar los avances existentes para lograr la reglamentación del Artículo 22 de Ley 41 General de Ambiente, que trata sobre el instrumento de gestión ambiental y ordenamiento territorial, el cual pretende establecer niveles de ordenamiento territorial ambiental, propiciando que

el mismo se realice minimizando los riesgos de vulnerabilidad por causas de fenómenos naturales y acciones antropicas, sobre asentamientos humanos y sistemas de producción.

En agosto de 2004 se promulgo la Ley 44 de Cuencas que establece un Régimen Administrativo Especial para el Manejo de las Cuencas que promueve entre otras cosas el establecimiento de los Comités de Cuenca; actualmente se trabaja en la reglamentación de la precitada Ley. De igual forma es importante destacar la Ley N° 5 del 28 de enero de 2005, que adiciona un Título al Libro II del Código Penal, denominado Delitos contra el Ambiente y dicta otras disposiciones; misma que define entre otras cosas los delitos contra los recursos naturales y la vida silvestre.

Como política e instrumento de gestión ambiental se elaboró el Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental (2004), las Estrategias Ambientales de Educación Ambiental Formal y No Formal (2003) y las propuestas para el esbozo de siete políticas ambientales que están en proceso de sanción por el Órgano Ejecutivo, entre las que se destacan: Política Integrada de los Recursos Hídricos, Política de Cambio Climático, Política de Descentralización de la Gestión Ambiental, Política de Información Ambiental y de Producción Mas Limpia

En el ámbito de las políticas publicas, el Gobierno Nacional ha propuesto la "Visión Estratégica de Desarrollo Económico y de Empleo hacia el 2009" que orienta el proceso de reactivación económica y social del país. La misma establece cinco pilares de política entre las que se destacan: "Reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso" y el "Desarrollo de capital humano" a través de la promoción del conocimiento, la educación y la salud como elementos claves para propiciar mejores condiciones de vida de la población y con ello lograr mayor competitividad.

La Autoridad Nacional del Ambiente propone la estrategia de **Conservación Para El Desarrollo Sostenible**, que enfatiza la atención a los ecosistemas mas frágiles y altamente vulnerables, afectados por procesos de deforestación y desertificación. Esta estrategia propone el cumplimiento de tres objetivos:

- Fortalecer la capacidad de la ANAM consolidando el marco jurídico, de políticas publicas ambientales para lo cual sugiere la creación de sinergias para mejorar la vinculación de las estrategias globales de conservación (Cambio climático, Biodiversidad y Desertification) y los objetivos del milenio.
- Trabajar en estrecha colaboración con el Estado, el sector privado y la sociedad civil para el fomento de las ventajas competitivas de Panamá en materia ambiental creando capacidades que permitan el diseñar y ejecutar entre otros el Programa de manejo sostenible para contrarrestar el fenómeno de degradación de suelos, desertificación y sequía, impulsando la producción mas limpia y apoyar la organización y participación ciudadana creando espacios de participación para la sociedad civil entre otros.
- Priorizar la atención a los componentes de la Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible, procurando con esto mejorar la capacidad de manejo de los Riesgos Ambientales impulsando acciones encaminadas a prevenir, mitigar o compensar los efectos de la degradación de suelos, desertificación y sequía, en el marco de la Convención de Naciones Unidas y de acuerdo a los lineamientos de política ambiental de la Republica de Panamá.

Los lineamientos de política antes indicados, así como las disposiciones legales se constituyen en un marco sólido y comprensivo para el desarrollo de lo establecido en la Convención. Con esto puede decirse que la República de Panamá a la fecha, cuenta con suficiente respaldo a nivel de políticas y marcos legales para desarrollar de manera efectiva gran parte de las acciones que sean necesarias para combatir la desertificación y la sequía.

A nivel de proyectos y como producto de la amplia movilización, que a nivel nacional internacional ha despertado la implementación de la Convención, no solo a nivel de las instituciones de gobierno sino también de la sociedad civil; es importante mencionar los proyectos desarrollados en las áreas críticas en los últimos años.

Cuadro N° 2: Listado de proyectos relacionados con el PAN

Nombre proyecto	Ejecución en el marco de PAN/PAS/	Proyecto ejecutado	Calendario	Asociados	Presupuesto
Proyecto Desarrollo Sostenible Ngobe Bugle	PAN	2003	2003-2008	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA - Gobierno de Panamá	\$33 millones
Proyecto Corredor Biológico del Atlántico Panameno	PASr	1999	1999-2004	Fondo para el Ambiente Mundial-GEF, Gobierno de Panamá	\$10 millones
Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial de la Comarca Ngobe Bugle	PAN	2006	2005-2006	Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) Instituciones del estado, ongs, academia	\$30,000
Plan Sequía Verano 2002-2006	PAN	2002	2002-2006	Asociación Nacional de Ganaderos- Ministerio de Desarrollo Agropecuario.	\$1700000
Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial de Provincia de Code	PAN	2006	2005-2006	Autoridad Nacional del Ambiente. (ANAM)	\$30,000

Construcción de represas de mampostería en la región de Azuero.	PAN			Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección de Ingeniería Rural y Riego.	\$ 1,500,000,000
Balance Hídrico Superficial de America Central	PAN/	2006	2005-2006	Empresa de Transmisión Eléctrica	\$ 20,000.00
Proyecto de bombas y paneles solares- Región Arco Seco	PAN		2005	Ministerio de Desarrollo Agropecuario	\$ 300,000.00
Proyecto Riego en pequeña escala en áreas socialmente vulnerables. (Chiriqui - Veraguas)	PAN		2005-2006	Ministerio de Desarrollo Agropecuario	\$ 1,500,000.00
Proyecto Familias Unidas	PAN		2004-2009	Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)	\$17.500,000 (primer año)
SERVIR (Sistema de monitoreo del clima para alertas.- Alertas de incendios)	PASr	2004	Inicio en 2004	ANAM/ CATHALAC/ NASA	
Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT)	PAN	2001	2001- fecha	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Gobierno Nacional	\$72,3 millones
Proyecto Autoevaluación de las Capacidades Nacionales para la Administración del Medio Ambiente Global (NCSA)	PASr	2006	2004-2006	Fondo para el Medioambiente Mundial (GEF) Ejecutado: Autoridad Nacional del Ambiente	\$200,000.00

La política ambiental y social del país se ha visto impulsada por el desarrollo de mecanismos e instrumentos que facilitan la gestión ambiental, y en ese sentido el acceso a fondos, ayudas, prestamos y cooperación internacional ha sido posible aunque no suficiente. Esta concordancia entre políticas públicas e instrumentos de gestión ambiental ha propiciado líneas de acción convergentes hacia problemas comunes dentro de los cuales se encuentran los relacionados con la sequía y la degradación de los suelos. Se destacan acciones vinculadas en su mayoría con la capacitación y la conservación de los recursos naturales mientras que se observan limitaciones en materia de investigación e innovación tecnológica, la generación de conocimientos, así como su amplia difusión en la sociedad. En cuanto al examen y evaluación de parámetros se observan

limitaciones importantes a nivel nacional, aun cuando a lo interno de los proyectos y programas que se ejecutan se efectúan procesos de control y seguimiento propios según parámetros específicos.

Es necesario dirigir mayores esfuerzos para la implementación del PAN en el desarrollo de acciones en áreas críticas, y en este sentido el Funcionario de Enlace Nacional (FEN) debe priorizar y generar espacios de colaboración con las instituciones, organizaciones no gubernamentales, entes internacionales de financiamiento y comunidad en general.

PARAGUAY

Con las experiencias e informaciones generadas en las últimas décadas del siglo pasado, el Paraguay pudo incursionar en el ámbito técnico-científico a nivel internacional tomando participación de las reuniones preparatorias de la Convención Internacional de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD) a nivel regional, subregional y nacional para la 1ra COP. Conforme a antecedentes, desde la 1^{ra} Reunión Regional de la CCD para América Latina y El Caribe, celebrada en Buenos Aires – República Argentina en 1996 hasta la IX Reunión Regional en Bogotá – República de Colombia 2003, grandes han sido los avances realizados por el Punto Focal / CCD-Py., entre ellas:

- a) Promulgación de la Ley 970/97 que ratifica la UNCCD
- b) Elaboración del Diagnóstico de degradación de la tierra en el Paraguay.
- c) Elaboración del Programa de Acción Nacional (PAN) de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
- d) Consolidación del Programa Subregional del Gran Chaco Americano.
- e) Reuniones de concienciación a nivel de OG`s y ONG`s sobre el **Gran Chaco Americano**, dentro del Programa Subregional de Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano.

Dentro de las iniciativas de acción nacional se destacan los aspectos técnicos de establecer y fortalecer, un sistema de alerta temprana y seguridad alimentaría a nivel local, nacional, subregional y regional, la redefinición de prácticas de gestión para prevenir o mitigar casos de sequía, la incorporación de un conjunto técnico-jurídico de procedimientos y mecanismos en los estamentos gubernamentales de gestión relacionados al manejo y conservación de suelos y agua, el fortalecimiento de marcos institucionales y jurídicos que permitan la descentralización de estructuras y funciones administrativas que guarden relación con la degradación de tierras, desertificación y sequía, y lucha contra la pobreza entre otros.

Las actividades que se desarrollan son con enfoque subregional, trabando estrechamente con la Argentina y Bolivia.

Actualmente se lleva adelante el Proyecto Gestión Integrada y Desarrollo Sostenible para reducir la degradación social, económica y ambiental en el Gran Chaco Americano (AICD/OEA).

El Objetivo general es revertir los procesos de deterioro que afectan a la region y mejorar las condiciones de vida de la población, a través de un modelo participativo de gestión integrada de los ecosistemas.

Programa de consolidación de e Implementación del PAS chaco, se realiza con el apoyo técnico - financiero del Mecanismo Mundial, que ha permitido a las partes alcanzar un alto compromiso

para asegurar la institucionalización de las actividades de lucha contra la desertificación y degradación de las tierras de la subregion.

El objetivo es elaborar y afianzar el programa de Acción Subregional para el Desarrollo Sustentable del Gran Chaco Americano a través de la creación de un mecanismo institucional y operativo que permita asegurar el cumplimiento de la fase implementación del PAS Chaco.

SAINT KITTS AND NEVIS

The Federation of St. Kitts and Nevis acceded to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) on September 28, 1997. Like many countries, St. Kitts and Nevis failed to meet agreed-upon deadlines for the submission of its National Action Programme (NAP). However, the Government is in the process of finalizing its NAP and will be submitting this to the UNCCD secretariat soon.

The NAP is the final output of a collaborative process involving government agencies, the private sector, non-governmental organizations (NGOs), community groups and individuals interested in combating land degradation. The major environmental problems that could exacerbate land degradation issues on St. Kitts and Nevis can be summarized as follows:

- a) The closure of the sugar industry in 2005 resulting in widespread loss of fertile top soils and considerably more land-based pollution of the sea, further destroying the already stressed and threatened coral reefs;
- b) Unchecked land degradation resulting in a net reduction in the significance of St. Kitts and Nevis as a tourism destination;
- c) Reduction in the productivity of agricultural land through land degradation resulting in the reduced value of that land and decrease in the available options for alternative uses;
- d) The need to protect and conserve both surface and underground potable water sources on St. Kitts and Nevis;
- e) Low rainfall patterns causing the vegetation to experience drought stress for several months of the year;
- f) The recent increase in squatter settlement areas on both St. Kitts and Nevis, normally found outside formal settlement boundaries.

The Government has, with the adoption of the 2006 National Physical Development Plan (NPDP), decided to pursue the integrated planning and management of land resources with the view of protecting the productive capabilities and natural resources of land. In addition, the Government has decided to restrict development on the Basseterre Valley aquifer, especially as it is being used to provide a major portion of the acceptable potable water in St. Kitts.

In addition to the above policy interventions, the NAP calls for the implementation of the following actions:

1. Establishment of a public awareness and education programme;
2. Increasing participation of NGOs, community-based organizations and the private sector;
3. Rehabilitation of degraded land resources;
4. Preparation of a Coastal Zone Management Plan;

5. Finalisation and adoption of a Land Use Code which establishes minimum standards for the development and growth of communities;
6. Regulation and reduction of the illegal occupation of land including regularization of squatter residential communities and implementation of a squatter relocation programme;
7. Preparation of a sustainable water resources management plan including enactment of a new Water Resources Management Act;
8. Development of an early warning system for predicting droughts and floods;
9. Rationalization of the roles and responsibilities of institutions involved in land management;
10. Revision and rationalization of the existing legal framework to ensure sustainable management and wise use of the country's land resources.

A steering committee has been established for implementation of the NAP. Its primary functions will include the formulation of goals and objectives, providing policy guidance, and serving as the coordinating authority to ensure and guide the participation of government sectoral representatives and NGOs. In addition, a series of workshops and community consultations have been planned to ensure community involvement and coordination of various stakeholder groups.

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

The purpose of the Third National Report (3NR), as required in accordance with Article 26 of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), is to inform the Conference of Parties of the progress made and constraints experienced by St. Vincent and the Grenadines (SVG) in implementing the UNCCD at national level.

SVG is an archipelagic nation comprising the main island St. Vincent, and 34 islands known as the Grenadines, 7 of which are inhabited. The physical characteristics of mainland St Vincent differ greatly from the topography and climate of the Grenadines, making land degradation issues extremely diverse in this small nation. The mainland is volcanic, while the Grenadine chain is low lying with no surface water and minimal top soil.

The Government and people of St. Vincent and the Grenadines have recognized land degradation as a constraint to sustainable development and became a party to the UNCCD on 16 March 1998. Commitment to this Convention is critical, given land degradation's deleterious effects on the major economic sectors of Agriculture and Tourism.

The 3NR for SVG highlights a number of priorities which must be addressed to: (1) facilitate implementation of the UNCCD and (2) improve the quality of life of Vincentians. These priorities include:

The development of a comprehensive environmental policy

Currently, SVG does not have a comprehensive legislative framework that adequately addresses land degradation and reflects the principles of the UNCCD. Activities related to land degradation therefore are not designed within the UNCCD framework, and are often subsumed under other environmental projects. Several pieces of legislation directly or indirectly address various aspects of Sustainable Land Management (SLM), making enforcement and management a

challenge. In addition, this fragmented approach, coupled with inadequate human and financial resources at national level, has hindered effective implementation of the UNCCD.

The development of a National Action Programme (NAP) for Land Degradation

The NAP will not only highlight the causes of land degradation, but also indicate how these problems are going to be addressed. It will consider, when addressing these problems, the National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP), the Special Programme on Adaptation to Climate Change (SPACC) project, SLM projects in St. Vincent as well as other national and social development plans such as the Interim Poverty Reduction Strategy Paper. It is envisaged that by identifying these linkages, the NAP will be implemented in a coordinated manner involving all relevant stakeholders. The NAP when finalized by October 2006 will be forwarded for the approval of Cabinet.

Strengthen and expand the National Environmental Advisory Board (NEAB)

The NEAB, which was appointed by Cabinet, originally consisted of 11 members including representatives from government, private sector and NGOs. The NEAB was established as an advisory body and to facilitate inter-ministerial and inter-sectoral coordination. However, this body must expand its mandate to coordinate the plethora of environmental projects related to SLM, Biodiversity, Climate Change and Biosafety. The NEAB will have to review its composition to take on this expanded role. The new NEAB will be multi-disciplinary and multi-sectoral, comprising relevant representatives from government, private sector, NGOs and civil society to ensure a participatory approach to the implementation of these projects. It is expected that the NEAB will be restructured by the end of 2006.

Improve mechanisms for participation of all stakeholders

Methods of participation using consultations, meetings, *inter alia*, must be improved in order to obtain the relevant information from all stakeholders but specifically from persons in the communities with traditional knowledge of the area. This information is absent because of the general perception amongst stakeholders that these meetings do not require their input. While improvements must be made in the manner in which information is gathered, there is also a need to effectively disseminate information to all stakeholders, in a manner which is easily understood. One such tool which can assist in improvement of the participative approach is KAP surveys which will be used to gather data about stakeholders' preference for obtaining and providing information.

Implement measures to ensure sustainable use of national resources and to combat Land Degradation.

Sustainable Land Management is critical to the development of St. Vincent and the Grenadines given the nation's limited land space. Consequently the Government has established a Forestry Department, a Soil Conservation Unit and also an Agricultural Diversification Unit. However, issues such as loss of agricultural lands to housing and squatting, deforestation, sand mining, and natural disasters all contribute to the challenge of managing land as a natural resource. It is hoped that projects such as the Integrated Forestry Management Programme (IFMP) and the National Land Information Management Project (NALIMP) funded by the European Union can assist in the implementation of the UNCCD in St. Vincent and the Grenadines, as well as the

UNDP LDC/SIDS Targeted Portfolio Project on Sustainable Land Management (SLM) and UNEP project on Preventing Land Degradation through Sustainable Land Management.

Improved mobilization of financial resources at both the national and international levels

Access to financial resources to assist St. Vincent and the Grenadines to meet its obligations under the UNCCD has been difficult. Though funding was provided to produce the First and Second National Reports, there was a delay in obtaining funding to develop the National Action Programme (NAP). However, assistance was given to many countries including St. Vincent and the Grenadines by the Global Mechanism, which initiated the process of the elaboration of the NAP. Additionally, government contributions continue to be the major source of funding for staff, conservation and agricultural workers and research officers attached to Regional Centres.

This report reflects the format provided by the UNCCD National Reporting Process Help Guide which includes: information on implementation status of the Convention in St Vincent and the Grenadines thus far; strategies and priorities established within the framework of sustainable development plans and policies; the institutional measures taken to implement the Convention; the participatory process in support of preparation of the National Action Programme; the consultative process in support of the preparation of the NAP and partnership agreement with developed country parties; measures taken or planned within the framework of the NAP; information on financial allocations from national budgets in support of implementation of the Convention; and a review of benchmarks and indicators utilized to measure progress and assessment. A country profile is also provided.

SURINAME

Background

Suriname signed the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in June 2000 taking into account national, regional and international challenges and considerations to combat desertification and drought. Although desertification is not considered of an immediate concern, Suriname acknowledges land degradation as an increasing environmental problem. The content of this report is based on the guidelines provided by the Conference of the Parties in decision 11/COP.1 and other pertinent decisions relating to the national reporting process (8/COP.4, 1/COP.5, 10/COP.5 and 1/COP.6).

Environmental Management Structure

In 2002 the environmental structure was strengthened with the establishment by State Decree of The Ministry of Labour, Technological Development and Environment (ATM), which is the overall responsible agency for coordination of activities related to global environmental management and the governmental and non-governmental bodies and institutions. This Ministry is primarily responsible for the development of an overall environmental policy and the coordination and monitoring of all activities regarding environmental policy. Other responsibilities of this Ministry of ATM regarding environmental management include promoting the implementation of the environmental conventions signed by the Government of Suriname.

The other Ministries have responsibilities over specific areas of global environmental management according to the Government Decrees on tasks of Ministries, 1991. The two

environmental bodies, the National Environmental Council (NMR) and the National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS) are now supporting the work of the Ministry of ATM.

Institution responsible for the UNCCD

UNCCD focal point

Name: Ministry of Labour, Technological Development and Environment (ATM)	Name: Mrs. Drs. M. Kerkhoffs-Zerp Position: Policy officer Ministry: Ministry of Labour, Technological Development and Environment (ATM)
Address: Wagenwegstraat 22 City: Paramaribo Telephone: 597- 475241 E-mail address: arbeid@sr.net	Address: Heerenstraat 40, Floor 3rd City: Paramaribo Telephone: 597- 420960 E-mail address milieu_atm@yahoo.com
Websites relating to desertification: 1. National Institute for Environment and Development 2. National Bureau for Statistics	1. http://www.nimos.org 2. http://www.statistics-suriname.org

Projects under the UNCCD

A working draft for the development of the national action programme (NAP) has been formulated and was submitted to the UNCCD secretariat in March 2006.

Suriname has chosen to formulate its actual NAP and Medium size project portfolio Project on sustainable land management (SLM) in parallel, because of the complexity associated with the subject matter and low implementing capacity regarding sustainable land management in national institutions. As was anticipated in this way the country could take full advantage of combining activities and processes required for both. The SLM Portfolio document will be finalized in June 2006.

Stakeholder's participation in the UNCCD implementation process

To fulfil its responsibilities as the coordinating agency for environmental issues the Ministry of Environment is already engaged in partnerships with several national organizations and has taken a participatory approach in implementing national action plans and programmes related to multilateral environmental agreements.

The three main groups involved in consultation, workshops and targeted consultations are the government institutions, non-governmental organizations (NGOs) and research institutions. Through consulting processes a number of prospective partnership agreements have been initiated, among others between the Environmental Section of the Ministry of ATM and donor organizations that are pursuing environmental and social programmes.

Meetings held after ratification of the UNCCD Convention to combat desertification:

1. Workshop on awareness-raising on Land degradation in May 2003 (Nederlands Instituut voor Meteorologische Opleiding en Scholing (NIMOS)/UNCCD).
2. Information session on Land degradation in June 2005 (ATM/UNCCD).
3. Workshop for stakeholders on completion of the Preliminary NAP Report and the initiation of the portfolio project on SLM in January 2006 (ATM/UNCCD/Global Environment Facility-United Nations Development Programme (GEF-UNDP)).

Related projects to mitigate or prevent land degradation

Even though Suriname is still in the process of formulating the NAP and the SLM portfolio project there are a number of programmes and projects currently under implementation that are directly or indirectly related to the UNCCD. These are presented in the following table.

Name of the project	Project implemented within the framework of :	Time frame (years)
Guianas Forests & Environmental Conservation Programme	Sustainable Forest Mangement	10
Development of sustainable agro forestry systems based on indigenous and maroon knowledge in the Guyana Shield region (GUYAGROFOR)	Sustainable Agricultural	5
Development of agro forestry system in the maroon village Hekununu	GEF/Small Grant Programmes	2
Tropical Ecology, Assessment and Monitoring Research (TEAM)	Conservation International	10
Land Registration and Land Information System for Suriname (GLIS)	Land policy	5
Development of modeling tools as decision support instruments for coastal zone management (CZM)	Coastal Zone Management	5
Tropenbos programme Suriname	Capacity Building Sustainable Forest Management Systems	2005-open

Challenges

- Inadequate coordination of projects on the national and international
- Weak legislation framework
- Limited human and institutional capacity
- The international funding agencies and implementing agencies approach separate government institutions for related land degradation projects this contributes to inadequate coordination.
- A major constraint in project preparation and execution is funding. To mobilize the necessary financial resources for the implementation of projects is often a time-consuming and frustrating activity.

Perspectives

Although desertification is not considered of an immediate concern, Suriname acknowledges land degradation as an increasing environmental problem. It wants to take preventive measures to deal with and minimize land degradation to fulfil its obligations to generations now and those to come.

- Establishment of the Environmental Authority and approval of the Framework law for Environmental Management.
- Establishment of a national coordinating committee on land degradation.

- Strengthening of the environmental institutional structures by the establishment of the Environmental Directorate at the Ministry of ATM.
- Creation of a national environmental fund for environmental rehabilitation
- Increase of cooperation with the relevant international agencies or organizations
- Development of partnerships with stakeholders as potential project implementation agencies at the national level
